

antelka



**LA FUERZA
DE TRABAJO
ENCADENADA**

GEDAR

SRK

La estrategia de reindustrialización condensa dos elementos centrales de la ideología socialdemócrata, a saber, la centralidad del trabajo asalariado y su personificación concreta en el trabajador colectivo de fábrica, como única encarnación válida del movimiento obrero, por ser su forma más evidente y la única que adquiere un corpus de tamaño social considerable. Y es que, el tamaño de ese movimiento importa, pues, por un lado la socialdemocracia tan solo se sostiene sobre la evidencia (...); y por otro, (...) porque tan solo un amplio movimiento obrero estructurado según sindicatos burocráticos, puede servir a la socialdemocracia como elemento legitimador de su verdadera función como garantista del pacto entre clases.

Contenido

6

10

26

40

52

EDITORIAL

Arteka

**El fantasma de la
reindustrialización**

REPORTAJE

Arteka

**Látigo y rebelión en
las periferias**

COLABORACIÓN

Mario Aguiriano

**Asociación y revolución.
Notas sobre la necesidad
de la acción política**

REPORTAJE

Unai Vicente

**Crisis y
desindustrialización en el
último cuarto del siglo XX**

**HISTORIA
REPORTAJE**

Imanol Satrustegi

**La llama obrera
domesticada de
la Transición**

El fantasma de la reindustrialización

Editorial

Quienes reducen los males del mundo a la obra de cabezas malvadas no lo hacen por simple desconocimiento; lo hacen porque esa es la contrapartida necesaria para presentarse a sí mismos como salvadores. Empero, eso tiene como consecuencia nefasta hacer imposible la salvación, pues su significado se relativiza y a lo sumo se reduce a una simple promesa, siempre asociada a la figura concreta del salvador.

Eso es lo que pasa en general con la política socialdemócrata. Siempre con la promesa de ganar, de abolir los males sociales, pero siempre retornan una y otra vez las mismas promesas, y los mismos males. El proceso de ruptura es un proceso de retorno, y de promesas renovadas, pues en realidad no se rompe con nada.

Al fin y al cabo, poner nombres y apellidos a los enemigos, si bien es necesario, no es suficiente en sí mismo. Es preciso señalar al enemigo, pero como encarnación de una condición social determinada, frente a la cual tan solo se puede luchar luchando contra el enemigo. La lucha de clases y la lucha por el comunismo no son procesos abstractos que se realizan en contra de una idea de organización; adquieren necesariamente una traducción concreta y se despliegan en lucha contra individuos que encarnan algo más que la simple individualidad.

Es preciso señalar al enemigo, pero como encarnación de una condición social determinada, frente a la cual tan solo se puede luchar luchando contra el enemigo. La lucha de clases y la lucha por el comunismo no son procesos abstractos que se realizan en contra de una idea de organización; adquieren necesariamente una traducción concreta y se despliegan en lucha contra individuos que encarnan algo más que la simple individualidad

Es por ello que, si bien hay que señalar al enemigo, y acaso traducir su función social como «el mal», de la misma manera hay que denunciar a quien pretende suplirlo en su función, pretendiendo hacer «el bien», cuando ambos, «el bien» y «el mal» no son atributos contingentes, sino que su contenido está establecido, desde nuestro punto de vista, por la ética del comunismo. Esas cabezas malvadas que pretenden sustituir en la gobernanza, son malvadas porque gobiernan, y gobiernan porque lo hacen según los requerimientos sociales inscritos en el modo de producción capitalista.

En el tema que nos ocupa, la subjetivización idealista de los procesos económicos supone recomponer el discurso socialdemócrata sobre los pilares de un pasado mejor, de mayor prosperidad económica y, sobre todo, de mayor legitimización social de la ideología socialdemócrata, que no es otra que la ideología burguesa con una ligera capa de maquillaje. Ese pasado es el pasado de grandes movimientos de masas articulados en torno al movimiento obrero, de altos salarios y de pacto social entre la burguesía y la aristocracia obrera, base económica y jurídica de la clase media socialdemócrata.

Ese pasado ya pasado, en cambio, sigue presente en el ideario socialdemócrata, fosilizado en la forma objetual de las grandes industrias. La ligazón entre prosperidad y maquinaria no es sino la otra cara del proceso de subjetivación anteriormente mencionado, pues este, así como idealiza el proceso objetivo, así mismo cosifica al sujeto y su desarrollo.

Hay una verdad objetiva: el capital es acumulación de riqueza abstracta de forma ampliada y continuada. Esta tiene, además, una traducción subjetiva, que es la avaricia capitalista por la ganancia. Esta última explica los grandes procesos económicos de los últimos siglos; pero, en su forma transfigurada aparece como una simple avaricia individual, asociada a cabezas malvadas. Ahora bien, esa avaricia individual es una necesidad económica porque el capital es más que su simple personificación individual.

Ese proceso de individualización e idealización del capital y del capitalista conlleva a la aceptación del capital como presupuesto social válido. No se trata de abolir el modo de producción capitalista, sino que de apartar a las cabezas malvadas o al capitalista, convertido en una categoría moral asociada al mal, y no a su función social objetiva. De esta manera, es suficiente con cambiar de nombre y de justificación una medida social, para que esta deje de ser capitalista. Así, vemos en el programa socialdemócrata la estrategia de reindustrialización como pilar fundamental del proceso de recomposición nacional de la acumulación de capital, a pesar de que no lo presenten así, sino que como una abstracta prosperidad y aumento de riqueza. Ese proceso de reindustrialización ha de ser de vanguardia, con tecnología puntera que coloque a la nación en posiciones ventajosas en el mercado mundial.

Si traducimos, eso significa lo siguiente: el proceso de industrialización y modernización de la producción ha de ser de un tamaño suficiente que permita apropiarse de una mayor ganancia, esto es, de plusvalor extraído a la clase obrera y, además, aumentar la extracción de plusvalor en relación con la inversión de capital realizado, esto es, aumentar la explotación de la clase obrera.

Así, la subjetivización del proceso social se traduce en la continuidad del proceso social, pero con otras personas, los nuevos burgueses que ya no son burgueses sino simples gestores de capital (sic). Empero, ese proceso social puede adquirir derroteros totalmente opuestos a las primeras intenciones de sus agentes activos. Y es que, si bien la socialdemocracia concibe la desindustrialización como una estrategia diseñada en despachos, la no comprensión de la ganancia como elemento central de estructuración de la economía capitalista conlleva a disonancias estratégicas y errores categóricos, tales como comprender la desindustrialización como proceso reversible del desmantelamiento del proceso concreto de trabajo y no como acumulación y centralización de capital.

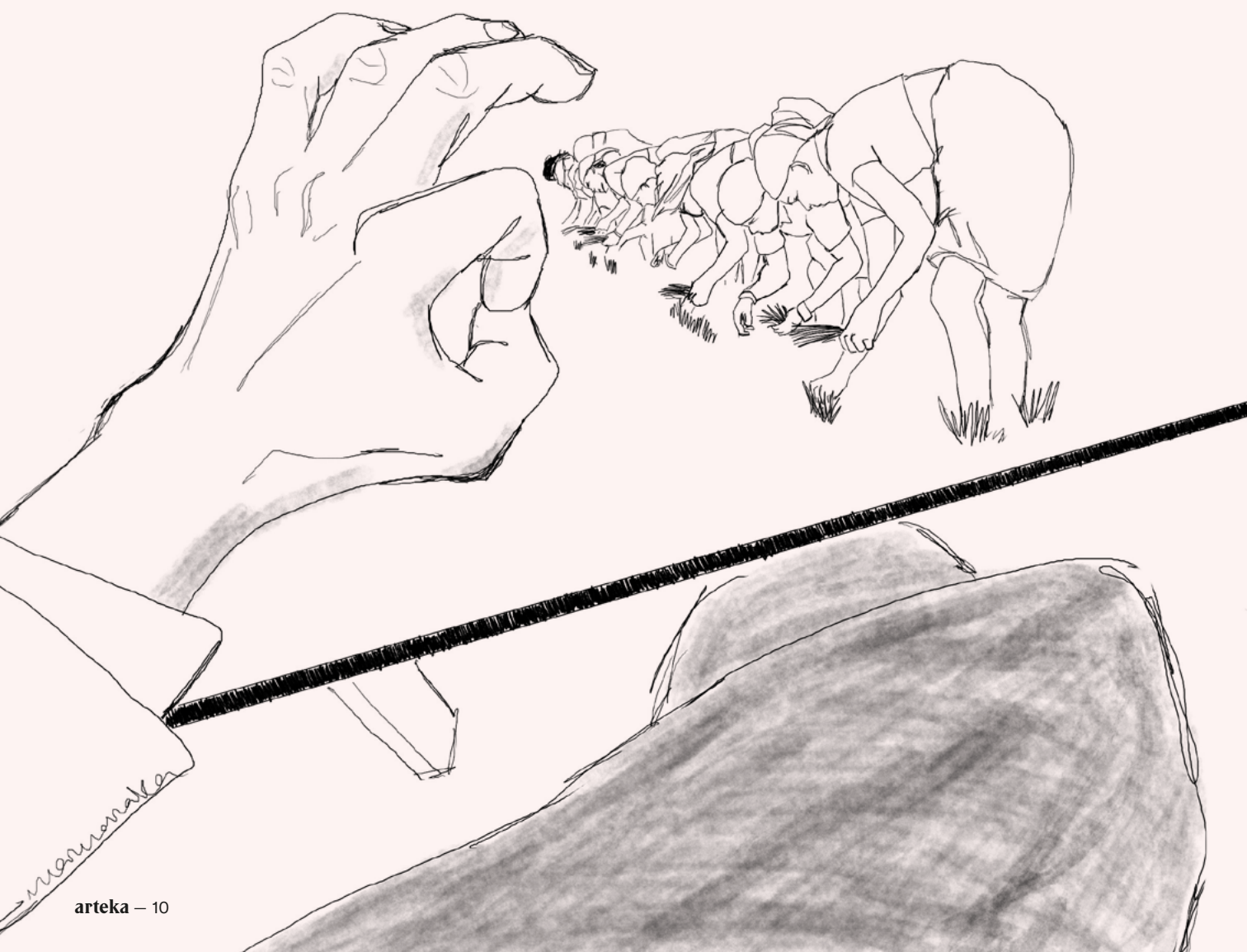
***La subjetivización
idealista de los procesos
económicos supone
recomponer el discurso
socialdemócrata
sobre los pilares de
un pasado mejor, de
mayor prosperidad
económica y, sobre todo,
de mayor legitimización
social de la ideología
socialdemócrata, que no
es otra que la ideología
burguesa con una ligera
capa de maquillaje***

El proceso de industrialización y modernización de la producción ha de ser de un tamaño suficiente que permita apropiarse de una mayor ganancia, esto es, de plusvalor extraído a la clase obrera y, además, aumentar la extracción de plusvalor en relación con la inversión de capital realizado, esto es, aumentar la explotación de la clase obrera

Esta ceguera se debe, en gran parte, a los propios presupuestos históricos de la socialdemocracia, adquiridos y reiteradamente representados como dogmas de fe. La estrategia de reindustrialización condensa dos elementos centrales de la ideología socialdemócrata, a saber, la centralidad del trabajo asalariado y su personificación concreta en el trabajador colectivo de fábrica, como única encarnación válida del movimiento obrero, por ser su forma más evidente y la única que adquiere un corpus de tamaño social considerable. Y es que, el tamaño de ese movimiento importa, pues, por un lado la socialdemocracia tan solo se sostiene sobre la evidencia (por ello, aquello de «la clase obrera ha muerto» de unos, y «la clase obrera ha de reproducirse en la industria» de otros), y solo lo que es evidente existe; y por otro, porque tan solo aquello que puede actuar como grupo de presión representado, esto es, un amplio movimiento obrero estructurado según sindicatos burocráticos, puede servir a la socialdemocracia como elemento legitimador de su verdadera función como garantista del pacto entre clases (o el aplastamiento del proletariado bajo la bandera de la igualdad social) y puede renovarla como la figura política que encarna la función del salvador.

Por ello, todos los presupuestos de la socialdemocracia como fuerza colectiva pasan por la reconstrucción de la centralidad del trabajo asalariado en su forma concreta de potencia social organizada, esto es, como trabajador industrial organizado en sindicatos burocráticos. Ahora bien, las falsas ilusiones y los fantasmas, así como pretender ser la encarnación del bien, son insuficientes para reorganizar la explotación de la clase obrera a una escala rentable que permita reconstruir un parque industrial nacional y un movimiento obrero subordinado a las directrices burocráticas y a la política de los profesionales de la clase media. ●

Látigo y rebelión en las periferias



Texto — **Arteka**

Imagen — **Maitane Lizarraga**



«Me temo que la verdad de lo sucedido contradice en tal medida nuestra idea de la Guerra Fría, de lo que significa ser estadounidense y del modo en el que ha tenido lugar la globalización, que simplemente ha sido más sencillo ignorarla».

VINCENT BEVINS,
El método Yakarta

Este reportaje se centrará en el contexto político que se ha desarrollado en las periferias como consecuencia de los procesos de deslocalización, centrándose en las expresiones concretas del movimiento obrero y en los casos de represión tanto de ayer como de hoy contra él. ¿Qué condiciones existen en esos países para la organización política? ¿Cómo ataca la burguesía a la organización de las masas desposeídas fuera del centro imperialista?

Antes de abordar directamente la cuestión de las libertades políticas, conviene refrescar la imagen general de las condiciones laborales en las periferias, para lo cual analizaremos algunos datos. En las últimas décadas se ha escrito mucho sobre el régimen específico del trabajo asalariado en las periferias. Sin ir más lejos, en otros números de esta misma revista abordamos dos reportajes sobre la estructura internacional del salario y las condiciones laborales en las periferias bajo los títulos «La muerte como oficio» ⁽¹⁾ y «Luces y sombras en el mapa» ⁽²⁾. En ellas, se dan cifras muy interesantes que ayudan a situar la deslocalización, por ejemplo, que el 60% de la producción textil se sitúa en Asia, para ser más exactos en el Sudeste Asiático. En el 2018 en el sector textil camboyano había 700.000 personas asalariadas trabajando por 181 euros al mes. En Bangladesh en año pasado fueron 4,5 millones, con un sueldo medio de 247 euros. Cerca de ahí, en Vietnam, se estima que el 25% de las exportaciones estatales pertenecen a la empresa Samsung; asimismo, es también el país donde Intel lleva a cabo la mayor parte de su fabricación. Es imposible encontrar un fenómeno así en las economías de las potencias avanzadas. El proletariado se encuentra en medio de este torbellino del mercado laboral; en 2017, 2,8 millones de trabajadores perdieron la vida en trabajos asalariados en el mundo entero, y alrededor de 374 millones, por su parte, sufrieron tanto lesiones como enfermedades a causa del trabajo. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Costa Rica es entre los 72 países analizados el país con más lesiones y muertes laborales, con 9.421 lesiones profesionales no mortales y 9,7 de muertes por accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores en 2016. Hay otros cuatro países latinoamericanos en el pódium: Argentina, Chile, Uruguay y México ⁽³⁾.

Según lo que ha sacado a la luz una investigación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ⁽⁴⁾, los trabajadores de Alemania, Noruega y Dinamarca eran los que de media menos horas de trabajo realizaban en 2019, con 1.386, 1.384 y 1.380 horas respectivamente. Mirando el otro lado de la moneda, los dos países con las horas medias de trabajo anuales más altas entre los países de la OCDE procedían de Sudamérica: México (2.137 horas) y Costa Rica (2.060). Chile les seguía en sexta posición, con 1.914 horas. Es más, como recuerda Statista ⁽⁵⁾, muchos países latinoamericanos superaban con creces la media de horas de trabajo semanales de los países de la OCDE. Destacan Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú, pues de cada diez trabajadores de estos países, más de tres trabajan semanalmente 49 horas o más. En otros países, como México y Colombia, el índice denominado «exceso de jornada» es del 27%, mientras que en Venezuela y Panamá sólo es algo inferior al 10%. En la clasificación de 2021 de las capitales mundiales donde los trabajadores realizaron una media de horas de trabajo más elevada en el mundo, no hay ningún país europeo ni norteamericano hasta el puesto 20 ⁽⁶⁾.

En lo que respecta a la higiene, el informe mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el pasado diciembre estimaba que al año mueren casi 400.000 trabajadores y trabajadoras en trabajos asalariados por las enfermedades contagiosas contraídas en los espacios laborales ⁽⁷⁾. Advierten de que sus principales factores suelen ser la mala calidad del agua potable, el escaso saneamiento y la falta de higiene, con una incidencia significativamente mayor fuera del centro imperialista.

En la clasificación de 2021 de las capitales mundiales donde los trabajadores realizaron una media de horas de trabajo más elevada en el mundo, no hay ningún país europeo ni norteamericano hasta el puesto 20

Por su parte, Unicef estima que en todo el mundo trabajan más de 160 millones de niños y niñas de entre cinco y diecisiete años, de los que se estima que casi la mitad (79 millones de niños) se dedica a trabajos peligrosos ⁽⁸⁾. En la África subsahariana, exactamente, se estima que el número de niños que trabajaba fue de 16,6 millones entre el periodo entre 2016 y 2020.

No es difícil imaginar que, ante todas las condiciones extremas, los trabajadores tienden a rebelarse, pues a menudo se encuentran en medio de situaciones que amenazan directamente su salud y su seguridad. Es lógico, pues, que la clase obrera de las periferias tome conciencia y organice periódicamente huelgas, protestas y levantamientos, como lo hicieron los trabajadores europeos y norteamericanos en la época de la industrialización del siglo XIX. La burguesía lleva más de dos siglos de experiencia como clase dirigente y ha perfeccionado los métodos para hacer efectiva la opresión en este proceso histórico.

LAS LIBERTADES POLÍTICAS EN EL MUNDO

¿Qué condiciones existen hoy en el mundo entero para la organización y lucha obrera? Por lo que muestran los datos, las libertades formalmente reconocidas, más que la norma, son una excepción en la mayoría de los lugares. Según el informe *Global Rights Index* ⁽⁹⁾ de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en el 87% de los países del mundo el derecho a huelga se violó en 2022, un 24% más que en 2014. En el 74% de los países se ha denegado a los trabajadores el derecho a sindicarse, y solamente entre el 2021 y 2022 el número de países que ejercen esa prohibición ha aumentado de 106 a 113. El 79% de los estados del mundo violaron también el derecho al convenio colectivo el año pasado. Los que han criminalizado el derecho de reunión y manifestación fueron al menos el 41%. Mientras que en 2014 los países que obstaculizaron o prohibieron el registro sindical fueron el 59%, en 2022 subió al 74%. El 66% de los países del mundo no garantiza el acceso a la justicia a sus trabajadores, mientras que al menos en 69 países estos han sufrido detenciones arbitrarias. Por si todo esto fuera poco, el año pasado fueron cinco más que hace dos los países que registraron agresiones físicas directas contra sus trabajadores: en 2021 se contabilizaron 45 y, en 2022, 50. El año pasado fueron asesinados en trece países trabajadores que luchaban por mejorar sus condiciones de vida, tanto en medio de las protestas como a través de atentados. Bangladesh, Colombia, Ecuador, Suazilandia, Filipinas, Guatemala, Haití, India, Irak, Italia, Lesoto, Myanmar y Sudáfrica registraron estos actos de terrorismo patronal.

En resumen, en los últimos nueve años se ha producido una ofensiva generalizada a nivel mundial contra todos los derechos políticos de la clase trabajadora. Aun así, la situación varía dependiendo del lugar: en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, el informe señala la existencia de «numerosas violaciones de los derechos de los trabajadores», «violaciones regulares» o «sistemáticas». Es, sin embargo, la zona que a nivel mundial las mejores condiciones tiene respecto a las libertades políticas de los trabajadores. Mediante la combinación de varios indicadores, CSI calcula una puntuación coyuntural de los derechos políticos de los trabajadores en una escala de uno a cinco. Siendo uno el «mejor» y el cinco el peor, estos son los índices de las zonas del mundo: Europa 2,49; África 3,76; Oriente Próximo y Norte de África 4,53; Asia Pacífico 4,22 y las Américas 3,53.



POR ZONAS

1. Oriente Próximo y el Norte de África

En cuanto a los derechos políticos de los trabajadores en general, en el informe del CSI, la región de Oriente Medio y el Norte de África representaban «la peor zona del mundo», según los datos aportados sobre el 2022. La clasificación media de 4,53 fue superior a la media del año anterior (4,50), por lo que la sitúan en el grado de «las violaciones sistemáticas y de los derechos no garantizados». Entre los 19 países que componen el bloque, se pueden ver los siguientes datos:

- En un 100% no tienen convenios colectivos.
- En un 100% tienen prohibido sindicarse.
- En un 100% se impide el registro de sindicatos.
- En un 95% se vulnera el derecho a huelga.
- El 84% niegan la libertad de expresión y reunión.
- El 79% niega a los trabajadores el acceso a la justicia.
- El 47% ha efectuado detenciones contra trabajadores.
- En un 42% se han contabilizado agresiones físicas directas.
- Asesinatos de trabajadores en Irak.

2. En Asia Pacífico (23 países):

- Vulneración del derecho a huelga: 87%
- Vulneración del derecho a la negociación colectiva: 83%
- Sin derecho a formar o afiliarse a un sindicato: 87%.
- Sin acceso a la justicia: 70%.
- Ataques físicos: 43%.
- Impedido el registro de sindicatos: 91%.
- Ataques contra la libertad de expresión y de reunión: 61%.
- Detenciones de trabajadores: 83%.
- Asesinato de trabajadores en Bangladesh, Filipinas, India y Myanmar.

3. África (39 países):

- Vulneración del derecho a huelga: 95%
- Vulneración del derecho a la negociación colectiva: 93%
- Sin derecho a formar o afiliarse a un sindicato: 95%.
- Sin acceso a la justicia: 90%.
- Ataques físicos: 31%
- Impedido el registro de sindicatos: 79%.
- Ataques contra la libertad de expresión y reunión: 45%.
- Detenciones de trabajadores: 36%.
- Asesinato de trabajadores en Suazilandia, Lesoto y Sudáfrica.

4. Américas (25 países)

- Vulneración del derecho a huelga: 92%.
- Vulneración del derecho a la negociación colectiva: 76%.
- Sin derecho a formar o afiliarse a un sindicato: 76%.
- Sin acceso a la justicia: 77%.
- Ataques físicos: 36%
- Impedido el registro de sindicatos: 88%.
- Ataques contra la libertad de expresión y reunión: 24%.
- Detenciones de trabajadores: 52%.
- Asesinato de trabajadores en Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití.

Por lo que muestran los datos, las libertades formalmente reconocidas, más que la norma, son una excepción en la mayoría de los lugares

CASOS CONCRETOS

Poniendo el foco en los asesinatos de los trabajadores y trabajadoras, Colombia merece una especial mención. En efecto, según los datos, es el país más peligroso del mundo para los trabajadores y sindicalistas. Según estudios realizados hace algunos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 1984 y 2012 más de 2.800 sindicalistas fueron asesinados en Colombia, casi 100 al año, con un grado de impunidad del 94,4% ⁽¹⁰⁾. El estudio también contabilizó 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 persecuciones, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros.

Según cifras de la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT Colombia), hace una década cerca del 64% de los asesinatos de sindicalistas de todo el mundo se producían en Colombia ⁽¹¹⁾. Sólo entre el año 2019 y el primer semestre de 2020, el CSI contabilizó cuatro intentos de homicidio contra sindicalistas, una desaparición forzada, 198 amenazas de muerte y 14 asesinatos de dirigentes ⁽¹²⁾. Entre 2021 y 2022, 13 sindicalistas fueron asesinados, otros seis fueron víctimas de intentos de asesinato, otros 99 fueron amenazados de muerte y ocho fueron detenidos de forma arbitraria ⁽¹³⁾. En una perspectiva histórica más amplia, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018 se registraron 14.992 violaciones de derechos contra las vidas, la libertad o la integridad física de los sindicalistas. De estas agresiones se estima que 3.240 afectaron a cerca de 480 sindicatos ⁽¹⁴⁾. La mayoría de los crímenes quedan sin resolverse y, al no tener ningún apoyo, las vidas de los sindicalistas y sus familias siguen constantemente amenazadas. América, en general, es el continente más letal para los trabajadores y trabajadoras. En el Índice Global de derechos del CSI de trece países que se registraron asesinatos contra sindicalistas cuatro estaban en América en 2022. En dicho conti-

En cuanto a los derecho políticos de los trabajadores en general, en el informe del CSI, la región de Oriente Medio y el Norte de África representaban «la peor zona del mundo», según los datos aportados sobre el 2022

nente, el año pasado se contabilizaron 15.481 vulneraciones de los derechos de los trabajadores, siendo 3.295 de estos asesinatos.

Hemos visto que las leyes antisindicales, los rompehuelgas y el paramilitarismo siguen siendo el pan de cada día de los movimientos obreros en la periferia. Un par de noticias publicadas no hace mucho permiten fijarse aún más de cerca en el caso. El Partido Comunista de Filipinas (CPP) reveló recientemente que dos dirigentes del partido y otros ocho militantes fueron asesinados por las fuerzas armadas el 21 de agosto de 2022 ⁽¹⁵⁾. Y es que ser comunista en Filipinas u organizar huelgas no es cuestión de bromas. El propio informe del CSI no puede ser más claro: «En Filipinas, los trabajadores y sus representantes siguen siendo

particularmente vulnerables a ataques violentos, actos de intimidación y detenciones arbitrarias. Los sindicalistas, maliciosamente etiquetados de “rojos” por el presidente Duterte, siguen sometidos a constantes amenazas de redadas e incursiones por parte de la policía y el ejército. Más de 50 sindicalistas han sido asesinados desde que el presidente Duterte accedió al poder en 2016». Cerca de allí, en Indonesia, se aprobó el año pasado una nueva ley que permitirá condenar a diez años de cárcel a militantes comunistas ⁽¹⁶⁾. Junto a ello, también se impondrán cuatro años de prisión por el mero hecho de hacer propaganda comunista. Como veremos a continuación, estas prácticas tienen profundas raíces históricas en todos los países.

LA REPRESIÓN EN LA PERIFERIA: SU HISTORIA Y SU DOCTRINA

Aunque la opresión y la criminalización de la resistencia organizada de la clase obrera es la tendencia más general y habitual propia del capitalismo, para comprender la forma concreta que adoptan hoy en día las violaciones de las libertades políticas en muchos países de la periferia, hay que tener en cuenta al menos dos factores: 1) La función que desempeñan estos territorios en este momento histórico en la división internacional del trabajo y en la cadena de producción global y 2) La historia de la contrainsurgencia. Como ya hemos dado algunas pinceladas para caracterizar el primer punto y el resto de los artículos de este ejemplar profundizan en esta función histórica, nos centraremos en el segundo factor: los métodos que históricamente se han utilizado para reprimir el proletariado organizado de las periferias y la lógica que han seguido.



Como es de sobra conocido, en la época del colonialismo existía una dominación directa sobre la fuerza de trabajo, las sociedades eran regidas por relaciones de servidumbre que llevaban la explotación hasta sus límites biofísicos. De este modo, las potencias colonizadoras que llevaron a cabo el saqueo de materias primas, metales preciosos y piedras preciosas fueron imprescindibles para la primera fase de acumulación y expansión del capitalismo. Al mismo tiempo, como ya habían hecho anteriormente en Europa y Norteamérica, les sirvió para integrar culturalmente nuevas relaciones productivas capitalistas entre las masas agrícolas desposeídas, para disciplinar a la población como fuerza de trabajo mercantil, fundamentalmente, para la «modernización». En Occidente, la propiedad privada y el trabajo asalariado están hoy profundamente arraigados culturalmente, hasta el punto de pensar que las sociedades se han organizado desde siempre en función de esos principios. Muchos creen que las civilizaciones que no han funcionado bajo esta forma social aceptaron sin resistencia alguna la pérdida de la propiedad comunal de la tierra o que la única manera de conseguir los medios de vida fuese tener que trabajar para otra persona, es decir, se cree que toda esa barbarie se estableció pacíficamente. Cualquier historiador serio desmiente hoy este mito, pues está sobradamente demostrado que tanto la población indígena como la esclava se opuso en muchos casos a esa vida ajena hasta la muerte. Los que no querían trabajar a su servicio, los que se rebelaban contra la expropiación de tierras, los que no querían ser evangelizados o los que simplemente no se doblegaban ante cualquier injusticia representaban un obstáculo para la implantación de la civilización capitalista. Los colonos los mataban como un perro que muerde al cazador.

Entre la década de los 40 y los 60 del siglo XX cambió la forma política con la que las potencias capitalistas dominaban las periferias y se iniciaron procesos de descolonización. Entre el siglo XIX y mediados del XX se produjo además un fenómeno significativo: la revolución proletaria. Desde la Gran Revolución de Octubre de 1917, las administraciones coloniales y la alta burguesía occidental eran conscientes de que la amenaza que representaban tanto los movimientos comunistas de ese espacio llamado tercer mundo como los movimientos de liberación nacional ya no era como la resistencia de las revueltas indígenas. La nueva guerra era «la cruzada contra el Comunismo Internacional», la guerra moderna. El enemigo al que se enfrentaban también fue capaz de poner en marcha procesos revolucionarios, organizarse internacionalmente y conquistar el poder político en algunos territorios. La Unión Soviética derrotó a una potencia industrial avanzada como la Alemania nazi, y ella sola ocupaba 1/6 de la superficie mundial.

Ese nuevo «enemigo comunista», en cambio, no luchaba basándose solo en la fuerza de las armas y presentando todas sus unidades en un campo de batalla. El oficial del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra de Indochina y la Guerra de Argelia, Roger Trinquier, explicó claramente esta lógica en su obra *La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas* ⁽¹⁷⁾. Subrayaba que tanto los movimientos de liberación nacional como los comunistas utilizaban una compleja graduación de métodos de lucha «tanto convencionales como no convencionales»: agitación, propaganda, adoctrinamiento, protestas, huelgas, sabotajes, atentados, actos de hostigamiento, guerra de guerrillas, y, por último, una guerra civil abierta para la toma del poder político. Es decir, los jefes de Estado de la generación de Trinquier aprendieron que los objetivos estratégicos de los comunistas consistían en ganar el apoyo cercano de la población, tomar el control del territorio y de sus procesos sociales, erradicar el viejo modelo de civilización y construir uno nuevo. Por si fuera poco, la burguesía de la metrópoli era plenamente consciente de sus debilidades políticas estructurales respecto a la

población periférica, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por poner un ejemplo, se estima que en la época colonial francesa de la primera mitad del siglo XX, vivían en Indochina alrededor de 21 millones de habitantes, los cuales, en la práctica, eran sirvientes de 40.000 colonos franceses. Además, no podemos dejar de lado que los únicos partidos políticos europeos que defendían la independencia de las colonias a principios del siglo XX eran los comunistas. La síntesis de estos factores hizo que, en el contexto de final del colonialismo e inicios del neocolonialismo se llegase a identificar que el comunismo tenía opciones claras para vencer en las periferias. Al hallarse frente a una guerra global en todos los frentes, crearon una red de exterminio a escala global. Vincent Bevins lo explica inmejorablemente en el libro *El método Yakarta*: «Se olvida con mucha frecuencia que el anticomunismo violento fue una fuerza mundial y que sus protagonistas trabajaban cruzando fronteras y aprendiendo de los éxitos y fracasos de otros lugares conforme su movimiento adquiría impulso y cosechaba victorias. Para comprender lo sucedido tenemos que entender esta colaboración internacional» ⁽¹⁸⁾.

Los ejércitos y servicios de inteligencia franceses y estadounidenses enseñarán los nuevos conceptos estratégicos como los de Trinquier y técnicas concretas en academias militares al estilo de la Escuela de las Américas, más efectivas a la hora de enfrentar a la nueva amenaza. A partir de entonces, la organización de una huelga ya no representaba una simple amenaza contra el beneficio privado de un empresario determinado, o realizar una manifestación no constituía un desorden público puntual, sino que constituía una fase, aspecto o pieza de la «ofensiva comunista global». Algo tan insignificante como colocar un cartel comunista en la calle se interpretaba como una amenaza directa, un acto de guerra. Tomar medidas al respecto será competencia de las administraciones tanto coloniales como postcoloniales, siguiendo las indicaciones de los manuales de contrainsurgencia. Es así como se entiende la crueldad desmedida de los métodos empleados para ejecutar a millones de personas a lo largo y ancho del planeta bajo la bandera de la «guerra contra el comunismo», así como la dimensión del genocidio. Además, el hecho de que los movimientos comunistas y los movimientos de liberación nacional se fundiesen con la sociedad civil enmarañaba aún más el asunto: la posibilidad de que cualquier persona de la periferia pudiese ser un luchador en la sombra convertía a todos en objetivos militares en potencia. Dicha caza de brujas derivó en una generalización de la paranoia y el miedo, así como en el arraigo de una cultura de la acusación. En muchos casos, se castigó, torturó y ejecutó sin pruebas a personas sin ningún tipo de vinculación con las organizaciones comunistas. En cualquier caso, no les importaba, ya que ni las leyes de guerra clásicas, ni el derecho internacional, ni siquiera la carta de los derechos humanos les servían para enfrentarse a ese enemigo que operaba en base a métodos de lucha no convencionales. Guerra psicológica, control de masas, servicios de inteli-

gencia, escuadrones de la muerte, métodos de tortura salvajes, secuestros, desapariciones, ejecuciones selectivas y en masa... son las armas de la nueva doctrina ensayada por los imperialistas en el teatro de operaciones de nivel global. En consecuencia, en diversos lugares, la cultura de la organización desaparecerá dejando atrás una estela de exilio, encarcelamiento, muerte y

poblaciones atemorizadas. En los lugares en los que los movimientos contestatarios no se disolvieron del todo, no quedará ni siquiera una sombra de lo que algún día fueron. Es comprensible, que, en diferentes países, tras todo este proceso, exista a día de hoy semejante agresividad reaccionaria ante cualquier viso de reforma política o social, por muy pequeña que sea.



La organización de una huelga ya no representaba una simple amenaza contra el beneficio privado de un empresario determinado, o realizar una manifestación no constituía un desorden público puntual, sino que constituía una fase, aspecto o pieza de la «ofensiva comunista global»

La Operación Cóndor de Sudamérica y los exterminios anticomunistas del Asia-Pacífico representan los ejemplos más claros de este terror burgués de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial. Con la excepción de Irán, todos los países que llevaron a cabo ejecuciones anticomunistas en masa fueron aliados de los EE. UU. Además, cabe señalar que las cifras que estos genocidios nos dejan corresponden a ejecuciones realizadas fuera del conflicto militar directo. Los datos que se presentarán a continuación corresponden a estimaciones conservadoras a la baja realizadas por organismos burgueses internacionales, recogidas por Vincent Bevins en el libro *El método Yakarta* ⁽¹⁹⁾:

- Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (1970-1980): 50.000-90.000 muertos
- Colombia (1984-2002): 5.000
- Corea del Sur (1948-1950): 100.000-200.000
- El Salvador (1979-1992): 85.000
- Filipinas (1972-1986): 3.250
- Guatemala (1954-1996): 200.000
- Honduras (1980-1993): 200
- Indonesia (1965-1966): 1.000.000-2.000.000
- Irak (1963-1978): 5.000
- Irán (1988): 5.000
- México (1965-1982): 1.300
- Nicaragua (1979-1989): 50.000
- Sri Lanka (1987-1990): 40.000-60.000
- Sudán (1971): 100
- Tailandia (1973): 3.000
- Taiwán (1947): 10.000
- Timor del este (1975-1999): 300.000
- Venezuela (1959-1970): 500-1.500
- Vietnam (1968-1972): 50.000

Prácticamente dismantelaron el Partido Comunista de Indonesia (PKI) en cuestión de meses. Un gigante de tres millones de militantes, el mayor Partido Comunista en el mundo allende la Unión Soviética o China, quedó reducido a la nada

El caso de Indonesia resulta especialmente llamativo. Al inicio de la década de los 60, era el sexto país más poblado del planeta, y se estima en cuestión de un año ejecutaron un genocidio que afectó a millones de personas; algunas fuentes hablan incluso de tres millones de víctimas. En esta masacre se emplearon los métodos más crueles que el ser humano es capaz de imaginar, que harían palidecer a cualquier agente de policía de occidente hoy. En la película *The Act of Killing*, los verdugos confiesan sus crímenes sin ningún tipo de complejos y con todo lujo de detalles ⁽²⁰⁾. De manera consciente, abrieron rumores de que el Partido Comunista (PKI) había comenzado a asesinar a altos cargos del ejército o que se preparaba un levantamiento, a la vez que el Estado daba la orden expresa de «asesinar a comunistas» a paramilitares, mafias, islamistas y soldados. De esa manera, la purga ideológica se dio a una velocidad con la que ni siquiera los nazis hubieran soñado: prácticamente dismantelaron el PKI en cuestión de meses. Un gigante de tres millones de militantes, el mayor Partido Comunista en el mundo allende la Unión Soviética o China, quedó reducido a la nada. También aprovecharon para llevar a cabo una limpieza étnica contra la población china, y exterminar sin ningún tipo de piedad hasta a los sindicatos y organizaciones de izquierda más pequeños.

Los sucesos mencionados representaron el «bautizo de fuego» ⁽²¹⁾ de los aparatos de estado recién inaugurados de la época postcolonial. A medida que demostraron la capacidad de dominar política y militarmente al proletariado local, permitieron a las respectivas burguesías nacionales de la periferia la creación de «estados independientes». Por lo tanto, a pesar de que el empleo de la violencia contra el proletariado es consustancial al poder de la burguesía, se puede afirmar objetivamente que los cuerpos policiales, fuerzas armadas y milicias de determinados lugares geográficos poseen una experiencia mayor y más actualizada.

En cualquier caso, cabe señalar la hipocresía que demuestra la moral burguesa occidental frente a semejante baño de sangre, llegando a justificar este tipo de fenómenos esgrimiendo «el atraso cultural» como argumento. De hecho, la razón es la inversa: la gran mayoría de genocidios antiproletarios de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial no pueden entenderse sin hacer referencia a las motivaciones ideológicas, los intereses políticos, la financiación económica y el entrenamiento militar de las potencias occidentales, esto es, son sucesos que corresponden a la modernidad capitalista, que han cumplido la función imprescindible de neutralizar su antagonismo. Bevins lo expresa de manera muy clara en su investigación: «La violencia que tuvo lugar en Brasil, en Indonesia y en otros veintiún países repartidos por el planeta no fue accidental, ni un efecto secundario de los principales acontecimientos de la historia mundial. Aquellas muertes no fueron «la muerte más fría y más insulsa», meros errores trágicos que no supusieron cambio alguno. Todo lo contrario. La violencia fue efectiva, parte fundamental de un proceso mayor. Sin una perspectiva completa de la Guerra Fría y de los objetivos internacionales de Estados Unidos, los hechos resultan inverosímiles, ininteligibles o muy difíciles de enjuiciar» ⁽²²⁾.

La gran mayoría de genocidios antiproletarios de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial no pueden entenderse sin hacer referencia a las motivaciones ideológicas, los intereses políticos, la financiación económica y el entrenamiento militar de las potencias occidentales, esto es, son sucesos que corresponden a la modernidad capitalista, que han cumplido la función imprescindible de neutralizar su antagonismo

El Partido Comunista de Filipinas (CPP) y su brazo militar El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) llevan en guerra con el estado desde 1968. Con la revolución socialista en el área urbana y el área rural como objetivo, dirigen a día de hoy una amplia oposición contra el gobierno autoritario de Duterte

RESISTENCIA PROLETARIA EN LA PERIFERIA

A pesar de la crudeza de la represión, cabe subrayar que no todos los oprimidos de la periferia han claudicado. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en las guerras civiles contra el Estado sostenidas por la Insurgencia Naxalita en India ⁽²³⁾ o El Nuevo Ejército del Pueblo de Filipinas. A pesar de no ser muy conocidas en el centro imperialista de occidente, podría decirse que estos movimientos comunistas han logrado la construcción de una especie de dualidad de poder, con una fuerza social con la que ninguna organización comunista occidental del siglo XXI podría llegar a soñar. Aquí, nos detendremos a observar de manera general el caso de Filipinas.

El Partido Comunista de Filipinas (CPP) y su brazo militar El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) llevan en guerra con el estado desde 1968. Con la revolución socialista en el área urbana y el área rural como objetivo, dirigen a día de hoy una amplia oposición contra el gobierno autoritario de Duterte. Para ello, han tejido una red compleja a partir de las organizaciones que simpatizan con la estrategia del CPP: El Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP). Tal y como se explica en un reportaje del portal *Descifrando la Guerra* ⁽²⁴⁾, el Partido sintetiza dos líneas: por un lado, mantiene la dirección de las proclamas de reforma democráticas en los «movimientos populares», y, por otro lado, se sirve de la guerra revolucionaria de guerrillas para erosionar el poder del Estado. De esa manera, gana en referencialidad entre los movimientos antifascistas y antiimperialistas, así como entre la masa de campesinos pobres. Con la táctica del Frente Único, tratan de dinamizar la agenda política del país, a través de la creación de organizaciones en diversos sectores de la clase trabajadora y llevar a cabo planteamientos que respondan a problemáticas cotidianas desde ellas.

También han desarrollado cierta táctica parlamentaria de manera intermitente, pero no con el objetivo de calentar poltronas en el Parlamento. Son muy ortodoxos en ese sentido: crean marcas electorales con las que presentar candidaturas, y, una vez hayan alcanzado el Parlamento, se aprovechan de los privilegios que este les brinda para rebasar la censura y conseguir un altavoz mediático. Su objetivo no es ganar las elecciones, y, por lo tanto, nunca emplean su representación de manera electoralista, ya que el CPP tiene claro que las elecciones son una herramienta del estado burgués. Por el contrario, ven el Parlamento como una herramienta propagandística para poner de relieve el carácter reaccionario del Estado y poner sobre la mesa proclamas que sean compatibles con el programa socialista.

Por otro lado, el Partido debe una parte de su buena fama a su historia; en efecto, fueron los comunistas quienes defendieron el país de manera más aguerrida contra la invasión del Imperio Japonés, quienes lucharon contra el imperialismo de los EE. UU. y quienes antepusieron la independencia a la influencia de las potencias extranjeras. A día de hoy, la gran mayoría de los sectores progresistas ven su labor de Frente Social con buenos ojos, ofician matrimonios homosexuales entre guerrilleros y están ganando apoyo dentro de la minoría musulmán. También realizan un trabajo político para hacer llegar su programa a los sectores liberales, nacionalistas, religiosos e intelectuales.

A lo largo de su largo recorrido, el CPP ha iniciado diversos procesos de negociación con el gobierno de Filipinas. No obstante, estas conversaciones no han tenido nada que ver con «procesos de paz» como el de Colombia. El modelo es totalmente diferente: por un lado, los comunistas de Filipinas

no aceptan ningún tipo de injerencia por parte de órganos internacionales, ni tampoco el desarme de la guerrilla. El gobierno de Colombia y los paramilitares han intensificado las masacres contra los movimientos obreros y campesinos aprovechando el desarme de los guerrilleros. El CPP ha aprendido la lección que deja este tipo de procesos y, por lo tanto, no está dispuesto a realizar ningún tipo de concesiones que puedan impulsar un proceso de desmovilización militar del NPA. Por el contrario, tienen claro que su estrategia se basa en la Guerra Popular Prolongada (GPP). Toda «conversación de paz» que se impulse se enmarca en una táctica orientada a alimentar dicha estrategia. Visibilizan que la llamada «Guerra contra el terrorismo y las drogas» llevada a cabo por el ejecutivo de Duterte no es más que una excusa para oprimir a los trabajadores y el campesinado entre la población, evidenciando el antagonismo social entre, por una parte, la coalición popular del proletariado y el campesinado pobre que desea la paz, y, por otra, bien el Estado de empresarios y terratenientes asesino y subordinado a la EE. UU. Aprovechan el inicio de las conversaciones para denunciar las masacres perpetradas contra los campesinos, el expolio de las multinacionales y el despotismo de los terratenientes, y, de paso, miden el estado de fuerza de cara a conseguir la amnistía de los presos políticos. En el 2007 consiguieron la amnistía para 1.377 militantes del CPP y el NPA. Con el objetivo de observar el tamaño actual del movimiento guerrillero, se calcula que solo el NPA contaba en 2018 con alrededor de 5.600 miembros repartidos en más de 120 frentes. Como es lógico, ha sido catalogado como «organización terrorista» por las mayores organizaciones terroristas del mundo, es decir, EE. UU. y la Unión Europea.

CONCLUSIONES

Que el capitalismo sólo gobierna mediante la democracia es una gran mentira. La historia ha demostrado con creces que los estados de derecho de occidente no se han estabilizado hasta haber conseguido ciertas cuotas de bienestar material, y que a día de hoy una parte mayoritaria de la clase trabajadora a lo largo del ancho mundo no cuenta con ningún tipo de derechos políticos. Se ha vivido una guerra social entre los estados modernos y los diversos movimientos antagonistas de masa que ha impedido totalmente la supuesta paz social que aquí y ahora aparece como eterna. El capital ha apostado por el modelo de gobernanza de la dictadura abierta para la gestión de ese conflicto, lo que aún a día de hoy se mantiene en la gran mayoría de territorios fuera de ciertas fronteras.

De manera correlativa, para lograr imponer socialmente el concepto de la clase media estratégico para afianzar el predominio de la burguesía, han sido necesarios asideros materiales concretos basados en el saqueo, la explotación y el genocidio. El desplazamiento de la producción industrial no está suponiendo más que una fase de estabilización de ese proceso. En la formación social capitalista, un sistema mundial basado en la lógica de acumulación de ganancia privada no es posible saciar las necesidades materiales de las amplias masas de un territorio determinado, si no es a costa de explotar y aplastar sin límites a la población de algún otro lugar. Pensar lo contrario no tiene sentido, así como pensar que las personas podemos vivir satisfechos y tranquilos trabajando 16 horas al día, mal alimentándonos, sin una higiene adecuada y bajo constante amenaza. Por lo menos una de cada diez personas vive en esas condiciones en el mundo, y, aún con niveles de organización irregulares, no siempre se deja aplastar con tanta facilidad. Mientras tanto, el rey continúa disfrutando de su banquete, aunque sabe que se sienta sobre un trono hecho de bayonetas. ●

Se ha vivido una guerra social entre los estados modernos y los diversos movimientos antagonistas de masa que ha impedido totalmente la supuesta paz social que aquí y ahora aparece como eterna. El capital ha apostado por el modelo de gobernanza de la dictadura abierta para la gestión de ese conflicto, lo que aún a día de hoy se mantiene en la gran mayoría de territorios fuera de ciertas fronteras





REFERENCIAS Y NOTAS

(1) GEDAR LANGILE KAZETA. *La muerte como oficio*. (27 de septiembre de 2020). gedar.eus.

(2) GEDAR LANGILE KAZETA. *Luces y sombras en el mapa* (10 de septiembre de 2020) gedar.eus.

(3) Florencia Melo, M. *Los países donde trabajar es peligroso* (3 de mayo de 2023). statista.com

(4) *Promedio de horas de trabajo* (Datos estadísticos de 2021). Clockify.me

(5) Pasquali, M. *¿Cuántas horas por semana trabajan los latinoamericanos?* (12 de abril de 2023). Statista.com.

(6) *Promedio de horas de trabajo* (Datos estadísticos de 2021). Clockify.me.

(7) GEDAR LANGILE KAZETA. *Munduko biztanleriaren %29k ez du kalitatezko ur edangarrira sarbiderik* (17 de marzo de 2023). Gedar.eus.

(8) Unicef. *Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir*. Unicef.es.

(9) Confederación Sindical Internacional, *Índice Global de los Derechos de la CSI 2022*. Bruselas, 2022. Globalrightsindex.org.

El CSI envía cuestionarios a los sindicatos de todo el mundo para que informen acerca de la violación de derechos de los trabajadores. Estas se registran anualmente entre abril y marzo, y se verifican. Posteriormente, se analiza cada uno de los países en base a 97 indicadores y la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo para crear un índice que refleje las violaciones de derechos laborales al nivel de las leyes y en la práctica.

(10) Público. *La impunidad arropa los asesinatos de 2.800 sindicalistas colombianos* (13 de marzo de 2013). Público.es.

(11) Telesur. *El 64% de asesinatos de sindicalistas en el mundo se producen en Colombia* (9 de mayo de 2013). Telesurtv.net.

(12) Confederación Sindical Internacional. *Índice Global de los Derechos de la CSI 2020*. Bruselas, 2020. Globalrightsindex.org.

(13) Confederación Sindical Internacional. *Índice Global de los Derechos de la CSI 2022*. Bruselas, 2022. Globalrightsindex.org.

(14) Echeverri, J.A. *El país de los 3.240 sindicalistas asesinados* (21 de septiembre de 2020). Ail.ens.org.co.

(15) GEDAR LANGILE KAZETA. *Filipinetako Alderdi Komunistako militanteen erailketak salatu dituzte* (21 de abril de 2023). Gedar.eus.

(16) GEDAR LANGILE KAZETA. *Indonesian hamar urterainoko kartzela.zigorrekin zigortuko dute lan politiko komunista* (9 de diciembre de 2022). Gedar.eus.

(17) Trinquier, R. *La Guerra Moderna*. Librería del Ejército, Madrid, 1963.

(18) Bevins, V. *El método Yakarta: La cruzada anticomunista y los asesinatos masivos que moldearon nuestro mundo*. Capitán Swing. Madrid, 2021. P. 16.

(19) *Ibidem*. P. 381-384.

(20) Oppenheimer, J. (Director). (2012). *The act of killing* [Película]. Final Cut for Real, Arts and Humanities Research Council (AHRC), Radio (DR), Spring Films, Novaya Zemlya, Piraya Film.

(21) Se hace referencia a la primera vez en la que un soldado participa en un conflicto armado. También se utiliza para denominar el primer asesinato que cometen las personas que acaban de ingresar en una organización militar para mostrar su fidelidad a sus superiores.

(22) Bevins, V. *El método Yakarta: La cruzada anticomunista y los asesinatos masivos que moldearon nuestro mundo*. Capitán Swing. Madrid, 2021. Pp. 14-15.

(23) Llopis, A. *Introducción a la cuestión Naxalita* (22 de diciembre de 2018). Descifrando la guerra.es.

(24) Marrades, A. *La insurgencia comunista en Filipinas* (28 de noviembre de 2018). Descifrandolaguerra.es.

Asociación y revolución. Notas sobre la necesidad de la acción política

Texto — **Mario Aguiriano**



El objetivo del análisis de la lucha de clases, de las tensiones y potencias del presente, debe ser la identificación de las mediaciones necesarias para hacer efectivo un salto cualitativo en su desarrollo. En otras palabras: los comunistas confrontan la lucha de clases desde la perspectiva de su desenlace revolucionario. Desligado de este fin, todo análisis acaba reduciéndose a una forma de contemplación, a una observación de un objeto presuntamente externo, como sucede en los ejercicios de sociología académica.

Pocos pueden dudar de que la coyuntura actual tiene connotaciones realmente trágicas, en el sentido estricto del término. A primera vista, parecemos encontrarnos con una crisis total del capitalismo, entendido como el conjunto de nuestras relaciones sociales, que sin embargo no se ve acompañada por la existencia de un sujeto antagonista capaz de organizar políticamente el derrumbe del capital. Ante esta realidad, hay quien se consuela con fantasear con un derrumbe automático e inevitable, que podría prescindir de la mediación de la agencia revolucionaria de la clase obrera. Otros, por el contrario, prefieren apelar a una abstracta voluntad revolucionaria, desligada de las condiciones objetivas del presente.

En rigor, ambas perspectivas son igualmente abstractas. Su error de base es el mismo: separar las dinámicas del capitalismo del desarrollo de la lucha de clases, escindir estructura y agencia, de modo que la ausencia de un sujeto revolucionario organizado pasa a explicarse apelando a cuestiones meramente subjetivas, de carencias ideológicas o falta de voluntad. Este es el caso de cierto marxismo-leninismo trasnochado. El error inverso consiste en ignorar por completo la cuestión subjetiva, abundando así en un evolucionismo plenamente impotente. El resultado es una caída inevitable en los pecados gemelos del voluntarismo y el fatalismo.

Una vía aparentemente intermedia, pero igualmente impotente, es aquella que convierte las limitaciones del presente en límites infranqueables. Esto es habitual entre quienes disfrazan la renuncia de realismo e invocan la correlación de fuerzas para justificar su absoluta sumisión a lo existente. La participación en los sindicatos del Estado o en las sucursales izquierdistas del Partido de la Reforma pasa a justificarse por su supuesta inevitabilidad.

De nuevo, esta postura tiene su reverso en el falso optimismo de quienes ignorar estas limitaciones o incluso las convierten en bondades, vistiendo la incapacidad de potencia y escondiendo la nulidad política bajo la máscara de la virtud. Aquí podemos ubicar a las falsas «autonomías», las autonomías desclasadas que aspiran únicamente a la independencia formal de su colectivo aislado.

En líneas generales, quien se ciega a la impotencia de su proyecto, quien se niega a evaluar racionalmente su práctica, quien rehúye la autocritica y trata de vender lo que son síntomas y formas de una derrota absoluta como símbolos de una victoria, debe ser considerado un adversario. La crítica debe ser implacable tanto con aquellos que abundan en fórmulas fracasadas como con quienes fabrican falsas alternativas, pues ambos forman parte del peso muerto de la historia.

La realidad no debe endulzarse sin que la crudeza se convierta en una excusa para la recaída en la contemplación fatalista. Esto es, en sentido más elemental, lo que implica analizar la realidad desde la perspectiva de su superación, pues tanto quien minimiza las dificultades del presente como quien las convierte en obstáculos insalvables participa de una forma de conciencia falsa. Nuestro punto de partida, por lo tanto, debe ser la completa impotencia presente del programa revolucionario de la clase obrera. A día de hoy, el proletariado está políticamente descompuesto. No constituye un poder independiente, un partido histórico con un programa y objetivos diferenciados, irreductibles a los de las demás clases sociales. Y sin embargo los estallidos se multiplican desde Francia hasta Chile, desde Sri Lanka a Irán, como indicios de un mundo burgués que se resquebraja. Se generalizan el disturbio y la revuelta espontánea, que irrumpen con fuerza durante días o semanas para pasar después a apagarse. Ante ellos, el Partido de la Reforma despliega hábilmente la fuerza combinada de la represión y la cooptación. Cuando, preso de sus propios límites y confrontado por unas fuerzas del Estado crecientemente autoritarias, el estallido comienza a demostrar síntomas de agotamiento, los partidos de la burguesía, que desde el principio han tratado de mutilar sus demandas para poder acomodarlas al orden existente, vuelven a aparecer como los únicos jugadores en el terreno.

*La crítica debe ser
implacable tanto
con aquellos que
abundan en fórmulas
fracasadas como con
quienes fabrican falsas
alternativas, pues ambos
forman parte del peso
muerto de la historia*

En la mediación de esta contradicción por la acción política de la clase obrera se funda la posibilidad objetiva del paso a un orden social superior, donde la riqueza se produzca en función de la necesidad, bajo el control de la asociación de productores libres, y en la que la medida de esta última sea el tiempo socialmente disponible para el desarrollo pleno de todas las facultades humanas



Pero solo la miopía política puede llevar a un desprecio absoluto de estas experiencias. Quien se conforma con subrayar su derrota no entiende que precisamente su valía es indisoluble de su fracaso, que su principal potencia reside en hacer explícitas sus limitaciones. Pues lo que todas ellas revelan progresivamente son no solo las crecientes grietas del orden social burgués, sino la necesidad objetiva de la organización política.

A la hora de fundamentar esta necesidad y exponer qué tendencias del presente conducen a ella conviene pararse a hacer un breve esbozo histórico. En cierto sentido, nuestro contexto parece guardar similitudes con el de la Europa de antes de 1848, donde un proletariado políticamente inmaduro comenzó a levantarse, de forma inicialmente caótica, contra un mundo sostenido sobre su dominación ⁽¹⁾. El resultado fue la subordinación de sus luchas al programa de una burguesía que todavía trataba de conquistar el poder político frente a las fuerzas del Antiguo Régimen. Los objetivos del proletariado, y sus tareas –necesariamente internacionales– se subyugaban así a los proyectos de sus propias burguesías nacionales, en un estadio en que las relaciones de producción capitalistas todavía estaban expandiéndose globalmente. Se trataba por lo tanto de un proletariado en proceso de formación, formado en su mayoría por artesanos organizados en pequeños talleres urbanos, y notoriamente atomizado. En toda Europa solo Inglaterra contaba con un desarrollo industrial mínimamente notable. La Liga de los Comunistas nació en respuesta a esta coyuntura, para pronto disolverse ante la derrota de las fuerzas revolucionarias.

En las revoluciones del 48 se hizo palpable el antagonismo de intereses entre proletariado y burguesía. En unas líneas célebres de *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Marx señala cómo llegada la hora decisiva «todas las clases y todos los partidos se habían unido en un partido del orden frente a la clase proletaria, como partido de la anarquía, del socialismo, del comunismo» ⁽²⁾. El Partido del Orden resultó victorioso en Francia y en toda Europa.

La lección que Marx y sus seguidores extrajeron de 1848, lección que subyace a la creación de la Primera Internacional 16 años después, es la necesidad de la *acción política* de la clase obrera ⁽³⁾. El partido del comunismo debía tomar una forma política definida, convertirse en órgano de organización y dirección del obrero colectivo. Habría de pasar casi medio siglo hasta que el Partido tomara su forma política más acabada, al consumarse durante la Gran Guerra la ruptura con la socialdemocracia. Esta lección, quizás aparentemente remota, es fundamental para el presente. De su actualización depende el futuro del socialismo como única alternativa a la barbarie.

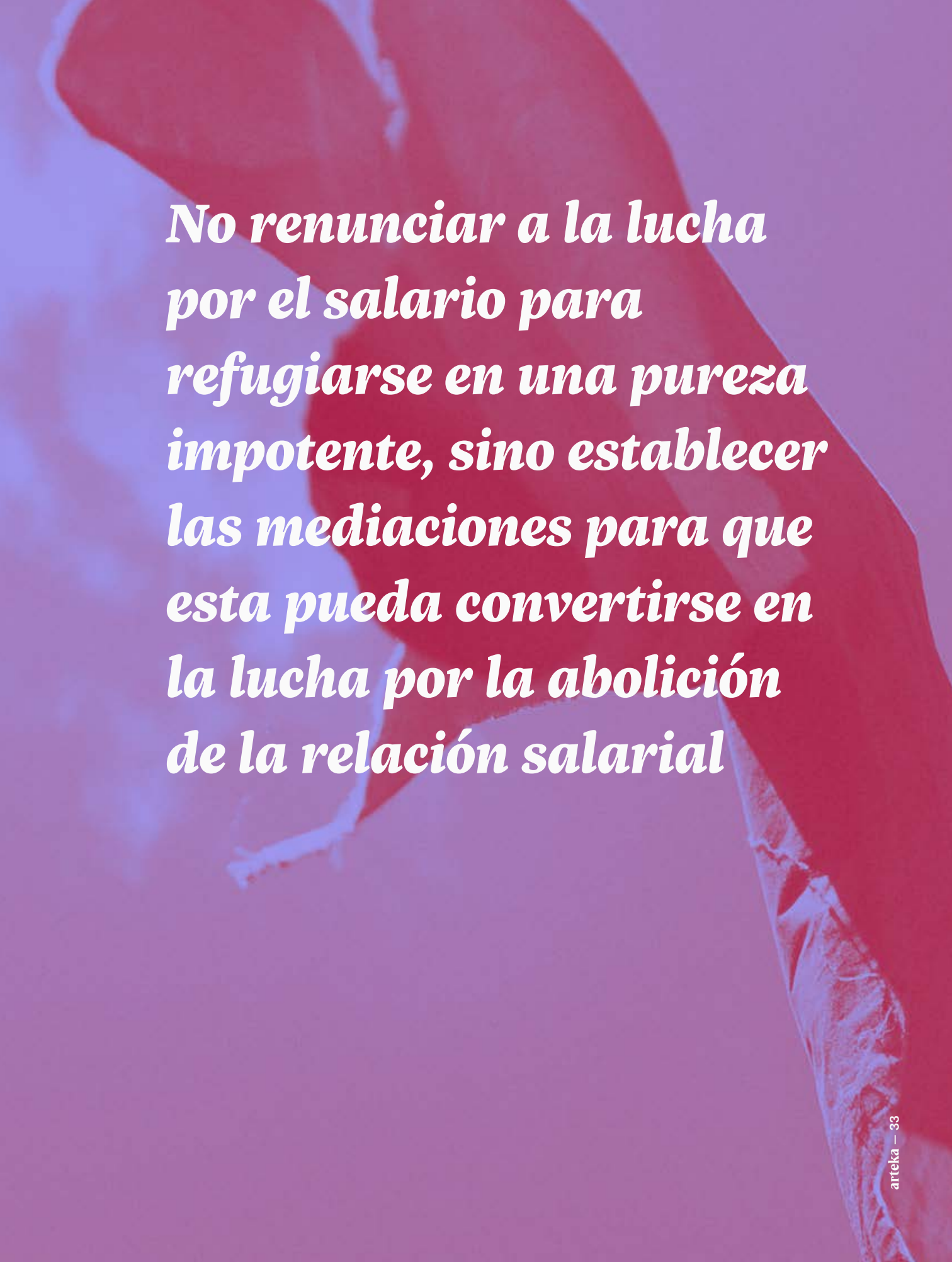
Por supuesto, la actualización no es la sujeción del movimiento real a un ideal abstracto, sino el intento de empujar este movimiento hacia su desenlace revolucionario. Esto pasa por confrontar un contexto histórico cuya característica más decisiva es el creciente anacronismo de las relaciones de producción capitalistas.

Este anacronismo no es un hecho fortuito, sino que se deriva de la contradicción intrínseca a las mismas. Las relaciones de producción capitalistas se sostienen sobre la explotación del trabajo vivo y sin embargo no pueden sino disminuir progresivamente su papel en la producción. La misma ley del valor, que dicta que el valor de cada producto debe venir determinado por el tiempo de trabajo necesario para reproducirlo, acaba redundando en la compulsión de reducir cada vez más el tiempo de trabajo incorporado en cada mercancía a través de la introducción de nuevos avances tecnológicos. El capital no cesa de acumularse, pero en este mismo proceso relega crecientemente al único factor que hace posible la acumulación (por ser el que produce plusvalor): el trabajo vivo. Esta tendencia contradictoria se expresa en la forma de una creciente sobreacumulación de capital, con la consiguiente caída de las tasas de ganancia. Lo que en la superficie económica aparecen como crisis puntuales no son sino expresiones de la profunda crisis de las relaciones sociales capitalistas. Es una crisis de la misma forma capitalista de la riqueza (el valor), cuyo medio de medida –el tiempo de trabajo socialmente necesario– se vuelve crecientemente obsoleto ante el estadio actual de las fuerzas productivas (que hacen del trabajo vivo un factor cada vez más redundante). En la mediación de esta contradicción por la acción política de la clase obrera se funda la posibilidad objetiva del paso a un orden social superior, donde la riqueza se produzca en función de la necesidad, bajo el control de la asociación de productores libres, y en la que la medida de esta última sea el tiempo socialmente disponible para el desarrollo pleno de todas las facultades humanas.

Volvamos, sin embargo, a la caracterización de nuestro presente. El despliegue de la tendencia histórica que Marx llamara «Ley General de la Acumulación» ⁽⁴⁾ da lugar a una contradicción creciente entre, por un lado, el aumento de las potencias del trabajo social cristalizado en el capital y, por otro, un trabajo vivo que se demuestra cada vez más redundante. El desarrollo de la gran industria ⁽⁵⁾, donde el trabajo es realmente subsumido por el capital y la ciencia y la tecnología se convierte en fuerzas productivas por derecho propio, tiene su reverso necesario en el recrudescimiento de las contradicciones de la acumulación, con la creciente sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. Esto conduce a la creación de una masa cada vez mayor de desposeídos sin función, que vagan entre el desempleo y las formas más variadas de subempleo. Se consolida así un inmenso proletariado informal, que personifica la fuerza de trabajo y sigue dependiendo del salario (directo o indirecto) para su subsistencia, pero cuyo vínculo con el trabajo es cada vez más inestable, y se da en su mayoría en forma de trabajo improductivo en el sector servicios. Este proletariado informal, cuya forma de acción política espontánea es el disturbio antes que la huelga ⁽⁶⁾, es el protagonista de los grandes estallidos de nuestro tiempo. Su crecimiento viene acompañado por una fragmentación creciente del obrero colectivo a nivel internacional ⁽⁷⁾, cuyo resultado más inmediato es la creciente incapacidad de la clase trabajadora a la hora de ejercer poder local (como sucedía cuando la huelga en una fábrica concreta, como la General Motors de Detroit o la SEAT de Barcelona, podía tener efectos inmediatos en la economía mundial).

Todos los factores anteriores –fragmentación internacional del obrero colectivo, aumento del desempleo estructural y del subempleo, auge del sector servicios– han contribuido a la desarticulación social y política de la clase obrera. Ante un contexto como este, hay quien afirma la necesidad absoluta de apostar por la vía reformista. Desde esta perspectiva, solo la introducción de mejoras graduales y la organización en torno a un programa de mínimos, todo ello estructurado en torno a grandes organizaciones reformistas y «bloques democráticos», puede volver a reactivar políticamente a la clase. Tal proyecto se movería en torno a dos polos: la lucha sindical por mejorar las condiciones de la compraventa de la fuerza de trabajo (aumento del salario directo y mejora de las condiciones de trabajo) y la lucha parlamentaria por la redistribución del producto social en forma de bienes y servicios públicos (salario indirecto). Dada la crisis del trabajo antes descrita, la segunda vía gozaría necesariamente de preeminencia. Este es el núcleo económico del proyecto del ala izquierda del Partido de la Reforma, de la que participan, a menudo sin saberlo, muchos supuestos «anticapitalistas».

A los defensores de esta postura les suele gustar disfrazarla de sobrio realismo, argumentando que es lo único posible en el aquí y ahora, y por lo tanto la única vía para que la revolución fuera posible en un futuro indeterminado. Sin embargo, esta indeterminación esconde un error de base. De por sí, la lucha por el salario enmarcada bajo una estrategia reformista, es únicamente capaz de perpetuar la relación de clase ⁽⁸⁾, en lugar de abolirla. Tratan de mejorar las condiciones de la clase explotada, no de abolirla junto al resto de las clases. En otras palabras: no existe un vínculo convincente entre la lucha por reformas y el objetivo final de la abolición de la relación de clase, no se hace explícito el modo en que la lucha por el salario, la lucha de clases como contradicción en movimiento, puede devenir en la lucha *contra* el salario. Pero la tarea de los comunistas es precisamente esta: no renunciar a la lucha por el salario para refugiarse en una pureza impotente, sino establecer las mediaciones para que esta pueda convertirse en la lucha por la abolición de la relación salarial.



***No renunciar a la lucha
por el salario para
refugiarse en una pureza
impotente, sino establecer
las mediaciones para que
esta pueda convertirse en
la lucha por la abolición
de la relación salarial***

La necesidad de la acción política en la que insistiera Marx solo puede ser la necesidad de la acción independiente, lo que requiere de la construcción de un Partido propio

Por supuesto, muchos que toman la postura que critico son simples mamporreros del capital, u obreristas para los que el objetivo de la emancipación ha desaparecido del horizonte para sustituirse por una mera lucha por mejoras parciales, por la conquista de una mejor posición negociadora para el trabajo en un mundo construido sobre su explotación. Quiero creer, sin embargo, en la intención honesta de algunos otros. Por ello, trataré de exponer la incompatibilidad de esta postura y la del proyecto de superación del capital, y de argumentar, además, que aunque esta política se haga en nombre de «los de abajo» (eufemismo para «proletariado») posee un contenido de clase muy definido (y en absoluto proletario).

En líneas generales, el problema más evidente de este proyecto es que replica el viejo error de Kautsky y la primera ortodoxia socialdemócrata: la ausencia de una mediación coherente entre los medios y los fines, entre una táctica reformista y un objetivo final declaradamente revolucionario ⁽⁹⁾. En consecuencia, el objetivo final acaba convirtiéndose en mera ideología, una pantalla para justificar la subordinación presente. La paradójica consecuencia consiste en defender que la superación del capital requeriría antes que nada salvar al capital de sí mismo: conseguir una vía de acumulación «sana» que permita mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta idea subyace al proyecto de un Green New Deal ⁽¹⁰⁾.

Tal mediación entre los medios y los fines solo puede proveerla la organización revolucionaria. Y, sin embargo, este proyecto aboga por la inclusión de las fuerzas que se autodenominan revolucionarias en el Partido de la Reforma. El objetivo de la independencia política pasa a sepultarse bajo la afirmación de la necesidad de sancionar políticamente la dependencia de la clase. Esto solo puede dar lugar a la mayor de las confusiones: la canalización de las fuerzas del presente hacia las trampas gemelas del sindicato corporativo y el cretinismo parlamentario.

La necesidad de la acción política en la que insistiera Marx solo puede ser la necesidad de la acción independiente, lo que requiere de la construcción de un Partido propio. En este, el objetivo del socialismo se concreta en una consciencia colectiva organizada como una fuerza social. Por descontado, este Partido ha de ser el partido del proletariado revolucionario, capaz de dar cuenta de la voluntad histórica concreta de la clase, y no una secta de iluminados que tome la forma de una vanguardia externa. Su construcción no estará acabada hasta poder dar cuenta de este objetivo, es decir, hasta que no cuente con un amplio respaldo de masas en un estadio de ofensiva. Pero este es el único medio para que nuestras acciones en el presente sean coherentes con el objetivo final de una sociedad sin clases. Todas las energías del presente –la organización de nuestros procesos de lucha y organización colectiva– deben orientarse en esta dirección estratégica, pues solo esta mediación puede hacer que las luchas inmediatas del presente tengan una orientación efectiva. Solo así las formas actuales de la lucha de clases pueden complementar el salto cualitativo que mencionábamos al comienzo del artículo: centralizando sus esfuerzos en torno a una estrategia unitaria y una organización centralizada de las capacidades, capaz de ejercer como síntesis política del movimiento real.



De lo contrario, estamos condenados a seguir cayendo en la contradicción elemental de la política parlamentaria, en la que la canalización de las demandas obreras no viene acompañada por la construcción de un poder social capaz de imponerlas ⁽¹¹⁾, o en los errores clásicos de su reverso tradeunionista. En ambos casos, las demandas distributivas de la clase obrera se presentan bajo la forma contradictoria de un imperativo por aumentar la explotación de la propia clase, única vía para aumentar el pastel a repartir ⁽¹²⁾. Este fue el núcleo de la política socialdemócrata en el periodo del Estado social. Este proyecto, sin embargo, requiere de aquello para lo que el capitalismo se demuestra crecientemente incapaz: el despliegue de la acumulación. En la actualidad, ante una crisis total, con un capitalismo donde el aumento de la tasa de explotación se ve acompañado por el saqueo generalizado de salarios como única vía para mantener a flote la rentabilidad, el contenido real de tales proclamas es muy diferente. Consiste, de hecho, en tratar de sostener, a través de las políticas redistributivas estatales, no ya las condiciones de vida del proletariado, sino las de una clase media en proceso de desintegración, necesario soporte social del orden del capital. Por último, en tanto que proyecto parlamentario, este se restringe necesariamente a un marco nacional desde que atacar la raíz del poder del global del capital resulta imposible.

Aunque no es necesario recapitular aquí los errores y el carácter contrarrevolucionario de la estrategia reformista de una vía parlamentaria al socialismo ⁽¹³⁾, cabe señalar que este proyecto se enfrenta hoy a dos dificultades adicionales. Por un lado, a la clásica confusión socialdemócrata (para la que el poder último del enemigo reside en el Parlamento o el Estado, en lugar de en el mismo proceso de acumulación global ⁽¹⁴⁾ se le añade el creciente vaciamiento de poder de los parlamentos y ejecutivos nacionales en favor de los bancos centrales y agencias de regulación internacional, capaces de moverse con fluidez entre el ámbito público y el privado y esquivar así los constreñimientos del constitucionalismo liberal ⁽¹⁵⁾. Existe, sin embargo, un problema más fundamental: a día de hoy, la acción estatal se enfrenta a un dilema irresoluble derivado de la consolidación de tres dinámicas paralelas: el estancamiento económico (sobreacumulación), el aumento de la población sobrante y crisis ecológica ⁽¹⁶⁾. Dentro del marco de las relaciones de producción capitalistas, el dilema es realmente irresoluble: la necesidad de impulsar el crecimiento económico (estimulando la inversión y el aumento de la productividad) agrava la crisis climática y la superfluidad de millones de trabajadores; los planes públicos de creación de empleo aceleran la sobreacumulación de capital, al sostener artificialmente capitales improductivos y aumentar el gasto estatal, sin conseguir por ello lidiar con la cuestión ecológica; la inversión en tecnologías verdes se topa rápidamente con el problema de la sobreacumulación y la expulsión de trabajo vivo; las medidas severas contra la crisis climática chocan contra el imperativo de valorización del capital. En consecuencia, la vía estatal-parlamentaria es hoy una vía muerta. La gestión del Estado burgués no llevará a la emancipación, ni servirá para rearticular políticamente a la clase.

La recomposición de una estrategia revolucionaria de la clase obrera del presente requiere abandonar estos proyectos fracasados. Requiere, a día de hoy, del despliegue de la forma-movimiento como proceso de reconstrucción del Partido a través de la progresiva articulación política de la clase bajo un programa comunista actualizado ⁽¹⁷⁾. En este movimiento, organización de la clase y para la clase, surgido de la asimilación consciente y colectiva de las contradicciones y tareas del presente, se cristaliza el salto cualitativo con respecto a las limitaciones de las luchas de las últimas décadas. Así, su despliegue va dando lugar a formas organizativas y de conciencia cada vez más elevadas y totalizantes. En conexión con la discusión anterior, hay varios puntos se imponen como cruciales. No pretendo, por supuesto, ser exhaustivo, sino simplemente subrayar algunas consecuencias del análisis desarrollado hasta aquí.

El primero punto es un estricto internacionalismo, cuya necesidad, central e ineludible para la política comunista, es hoy especialmente imperiosa. La fragmentación actual del obrero conlleva que su posibilidad de ejercer poder social requiera de niveles de organización inusitados, que trascienden por principio las fronteras nacionales ⁽¹⁸⁾. El Partido Comunista solo puede ser la Internacional, y su proceso de construcción pasa por la organización internacional del proletariado a escalas cada vez más amplias. Conviene recordar que nunca la clase obrera *en su conjunto* ha reunido mayores capacidades potenciales para someter la producción social a un control consciente y colectivo, y que, sin embargo, quizás nunca ha sido tan impotente si se mantiene como sujeto atomizado. El Partido no es, en rigor, sino obrero colectivo consciente. Solo en tanto que órganos conscientes del trabajo social, estructurado en torno a este, pueden las crecientes potencias científicas de los trabajadores individuales convertirse en medios para la socialización completa de la producción.

El segundo punto es la necesidad de conectar ese proletariado informal masivo, políticamente disruptivo y sin embargo difícilmente capaz de ejercer en lo inmediato un poder social notable, dado su posición con respecto a la producción, con los trabajadores productivos cuyo vínculo con la producción es todavía más estable. Solo así el disturbio y la huelga pueden convertirse en tácticas complementarias dentro de una estrategia unificada.

El tercer punto, de especial relevancia en el centro imperialista, consiste en el imperativo de subordinar a los sectores proletarizados de las clases medias a un programa político proletario, destruyendo toda tentativa de que la acción política se convierta para estos sectores en un medio para tratar de recuperar los privilegios perdidos entre cuyas promesas crecieron. Esto requiere de un análisis riguroso de las determinaciones sociales de este grupo ⁽¹⁹⁾, cuyas capacidades formativas y potencial radicalismo tienen su reverso en la tendencia al individualismo y el aspiracionismo, y sobre el que pesa la tentación constante de abandonar el proyecto colectivo de la clase en pos de las prebendas que proporciona el ala izquierda del Partido de la Reforma. En este sentido, la disciplina consciente y la organización racional de la autoridad y el trabajo militante son medios necesarios para combatir la ideología del individualismo. El velo del fetichismo de la mercancía, que confronta al individuo privado con una sociedad constituida en un ente externo ⁽²⁰⁾, solo comienza a rasgarse cuando las potencias del trabajo individual pasan a organizarse conscientemente, revelándose cada individuo como órgano del trabajo social. De este modo el Partido en construcción prefigura lo que solo podría completarse con la completa abolición del capital.



***Solo así las formas actuales
de la lucha de clases pueden
complementar el salto cualitativo
que mencionábamos al comienzo del
artículo: centralizando sus esfuerzos
en torno a una estrategia unitaria y
una organización centralizada de las
capacidades, capaz de ejercer como
síntesis política del movimiento real***



***El Partido no es, en rigor, sino
obrero colectivo consciente. Solo
en tanto que órganos conscientes
del trabajo social, estructurado en
torno a este, pueden las crecientes
potencias científicas de los
trabajadores individuales convertirse
en medios para la socialización
completa de la producción.***

El cuarto punto pasa por identificar a los sectores más avanzados de la clase, aquellos que podrán ejercer de punta de lanza en el proceso de su recomposición en clave comunista. A día de hoy, existen buenos motivos para afirmar que este papel corresponde a la juventud proletaria. La agudeza de su desposesión, su socialización en un contexto de crisis perpetua, con el desmoronamiento creciente de la sociedad de las clases medias y su neutralización del antagonismo de clase (unida a las promesas ideológicas de ascenso social y estabilidad), el horizonte de inmisericordia y redundancia social que se abre ante ellos son factores determinantes a este respecto. En rigor, esto no supone una anomalía histórica. La juventud proletaria fue, de hecho, el actor social determinante en la ruptura comunista con la socialdemocracia acaecida durante la Gran Guerra. La acción política de una generación de obreros que comenzaba ya a alzarse contra el reformismo de los Partidos Socialdemócratas ⁽²¹⁾ y fue después lanzada en masa a la picadora de carne humana de la guerra imperialista precipitó decisivamente la crisis del mundo burgués y la apertura de un ciclo revolucionario. Sirva como dato: la media de edad entre los participantes del Sexto Congreso (1917) del Partido Bolchevique era de 29 años ⁽²²⁾.

La mediación política es la única vía para recomponer la clase en clave revolucionaria

El quinto punto señala la necesidad de identificar a su vez los sectores estratégicos de la producción: aquellos en los que incluso niveles modestos de organización pueden redundar en la capacidad de ejercer un cierto poder social. A día de hoy, existen buenos motivos para afirmar que este rol corresponde de forma eminente (al menos en un centro imperialista crecientemente desindustrializado) a los sectores logísticos de cuyo desempeño depende el flujo internacional de mercancías ⁽²³⁾. Planteados como luchas tácticas apoyadas por sectores más amplios de la clase, y bajo una medición correcta de la correlación de fuerzas, los conflictos que pueden desplegarse en estos sectores tienen la capacidad de tener efectos expansivos en la recomposición del poder social de los trabajadores. Aquí, como en todos los puntos anteriores, la organización política es la mediación social capaz de enmarcar esta construcción de poder dentro de un proyecto determinado por la necesidad de la ofensiva futura y el sometimiento de la producción social al control colectivo de los individuos asociados.

Para concluir, me gustaría insistir en una cuestión central: la mediación política es la única vía para recomponer la clase en clave revolucionaria. Puede que hace cien años los socialistas fantasearan con la unificación espontánea de una clase en imparable crecimiento en torno al proletariado industrial como punta de lanza del socialismo. Hoy, ante una clase fragmentada y la extenuación de la dinámica de la acumulación, esta idea carece por completo de sentido. Todo proceso de recomposición de la clase requerirá de un grado notable de artificialidad, de ensamblaje de partes dispares, a través de los medios más variados ⁽²⁴⁾. Confío en haber dado al menos algunos argumentos importantes de por qué esta construcción, si quiere ser efectiva, debe tener su centro en la organización política. ●

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1)** Para un análisis detallado de las revoluciones del 48 véase Clark, Cristopher. *Revolutionary Spring. Fighting for a New World 1848-1849*, Penguin, Nueva York, 2023.
- (2)** Marx, Karl. *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Fundación Federico Engels, Madrid, 2003, p. 23.
- (3)** Véase Galcerán, Montserrat. *La invención del marxismo*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2023, pp. 27-28.
- (4)** Marx, Karl. *El Capital, Crítica de la economía política. Vol 1. El proceso de producción del capital*, Siglo XXI, Madrid, 2021, pp. 703-806.
- (5)** *Ibíd*, pp. 447-588.
- (6)** Véase Clover, Joshua. *Riot. Strike. Riot. A New Era of Uprisings*, Verso, Londres, 2019.
- (7)** Véase Charnock, Greig y Starosta, Guido (eds.). *The New International Division of Labour. Global Transformation and Uneven Development*, Palgrave, Londres, 2016.
- (8)** Clare Roberts, William. “Class in Theory, Class in Practice”, *Crisis & Critique*, vol. 10, no. 1, pp. 256-257.
- (9)** Sobre este punto véase Schorske, Carl E. *German Social Democracy, 1905-1917. The Development of the Great Schism*, Harvard University Press, Cambridge, 1983; Sassoon, Donald. *Cien años de socialismo*, Edhasa, Barcelona, 2001.
- (10)** Véase, para una excelente crítica, Miasni. “En caso de incendio ¿Green New Deal?”, en *Marx XXI. Contra la socialdemocracia*, Contracultura, Madrid, 2023, pp. 195-212.
- (11)** Clarke, Simon. “Estado, lucha de clases y reproducción del capital” en *Marx, Marginalismo y la Sociología Moderna*, Dos Cuadrados, Madrid, 2023, p. 340.
- (12)** Véase Clarke, Simon, “Estado, lucha de clases...” pp. 340-341 y Mattick, Paul. “The Limits of Reform”, en *Marxism. The Last Refuge of the Bourgeoisie?* The Merlin Press, Londres, 1983, pp. 186-195.
- (13)** Para un análisis más exhaustivo véanse los artículos recopilados en VVAA. *MarxXXI. Contra la socialdemocracia*, Contracultura, Madrid, 2023.
- (14)** Véase Koltitz. “Constructivismo político y lucha de clases”, *Gedar*, 2019.
- (15)** Callincos, Alex. *A New Age of Catastrophe*. Polity Press, Londres, 2023, pp. 71-72.
- (16)** Para un análisis detallado de esta cuestión véase Alami, Ilias; Copley, Jack; Moraitis, Alexis. “The ‘Wicked Trinity’ of Late Capitalism: Governing in an era of Stagnation, Surplus Humanity, and Environmental Breakdown”, *Geoforum*, 2023, pp. 1-13.
- (17)** Véase Koltitz, “Articulación de Consejos y Estrategia Socialista”, *Gedar*, 2021.
- (18)** Véase Angry Workers, “Estrategia revolucionaria de la clase obrera para el siglo XXI – Parte 1”, en abwerten.noblogs.org
- (19)** A pesar de que difiero con el autor en cuestiones teóricas importantes y algunas de sus tesis centrales, puede encontrarse un análisis perspicaz de esta problemática en Evans, Dan. *A Nation of Shopkeepers. The Unstoppable Rise of the Petty-Bourgeoisie*, Repeater Books, Londres, 2023.
- (20)** Véase, sobre este punto, Carrera, Juan Iñigo. *Usar críticamente el capital*, Ed. Imago Mundi, Buenos Aires, 2007.
- (21)** Véase Schorske, Carl E. *German Social Democracy 1905-1917*.
- (22)** Véase Davis, Mike. “Old Gods, New Enigmas: Notes on Revolutionary Agency”, en *Old Gods, New Enigmas. Marx’s Lost Theory*, Verso, Londres & Nueva York, 2018.
- (23)** Véase Vela, Corsino. *Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2018.
- (24)** Puede encontrarse un análisis detallado sobre la necesidad de esta artificialidad, aunque realizado desde una perspectiva política muy diferente a la desarrollada aquí, en Rodríguez, Emmanuel. “¿Cómo se hace una clase? en *El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2022, pp. 393-421.

Crisis y desindustrialización en el último cuarto del siglo XX

Texto — **Unai Vicente**

Imagen — **Saraka**





Desde la irrupción de la crisis internacional de los setenta se ha asistido a una desindustrialización en Europa. El texto trata de estudiar este proceso y la posterior reestructuración del aparato productivo en el Estado español y la CAV hasta finales del siglo XX. Si bien la desindustrialización no ha finalizado, es necesario detenerse en este período de estancamiento para tratar de entender los factores claves sobre los que se sostuvo la acumulación y los principales cambios acontecidos para lograr dicho objetivo. A su vez, se abordarán las principales consecuencias sociales y políticas.



En la década de los setenta emergieron en el centro imperialista los males de un capitalismo en crisis cuyos límites de acumulación empezaron a asomarse a finales de los sesenta. El crecimiento ilimitado en Europa tras la guerra fue sobrepasado por las enormes inversiones en capital fijo, el aumento significativo de los costes de la energía, un proceso inflacionista, la saturación nacional de la demanda y el crecimiento de la competencia capitalista, lo que conllevó un descenso de la tasa de ganancia. Además, esto coincidió con una ofensiva del movimiento obrero organizado en torno a la gran industria, que exigió la mejora de las condiciones de vida de estos.

Las políticas keynesianas anticrisis de la época, dirigidas a sostener la demanda y el consumo, no hicieron más que contribuir a la inflación y al desempleo en un periodo de escaso crecimiento productivo. Asimismo, el proletariado se negó a que sus condiciones de vida disminuyesen y la burguesía a ceder más ganancia. Entonces, comenzaron a implementarse una serie de políticas orientadas a la represión de la demanda a través de una embestida contra los salarios y una socialización de los costes originados por la crisis. Esto dio lugar a una intervención masiva de los Estados en favor de la acumulación capitalista, la cual mostraba dificultades por sí misma (Piqueras, 2015). A su vez, arremeter contra la presión obrera y aumentar la tasa de plusvalía fueron necesidades de primer orden para la burguesía. En Europa, la desarticulación del movimiento obrero se logró mediante la violencia y el sindicalismo clásico, que aseguró la rentabilidad del capital a costa de un empeoramiento de las condiciones laborales y de vida del proletariado.

Aun así, no se alcanzaron las tasas de crecimiento precedentes. Si bien se experimentaron ligeras mejoras a mediados de los ochenta, estas arrastraron problemas estructurales como la caída de la demanda, derivada del estancamiento del salario real y el exceso de capacidad industrial. Los diferentes Estados trataron de conservar y modernizar los sectores productivos principales. En cambio, en las regiones europeas especializadas en industrias obsoletas tuvo lugar una fuerte desindustrialización. El capital, por su parte, encontró una vía de salida en el desplazamiento espacial de la producción hacia lugares donde su composición técnica era menor, lo que reducía el riesgo de sobreacumulación y permitía la incorporación de más mano de obra. Esta situación generó en Europa una gran cantidad de trabajadores industriales excedentes.

Ante salarios estancados y altas tasas de desempleo, los principales países industriales se vieron obligados a buscar el crecimiento en las exportaciones para compensar la debilidad del mercado interior. Esto incrementó la competencia capitalista y el exceso de capacidad productiva, agravando la saturación internacional de los mercados, especialmente con la entrada de nuevos países como China, Corea del Sur, los países del Sureste Asiático e India. Estos países lograron ganar cuota de mercado, primero, en las ramas de producción de baja intensidad de crecimiento y luego, en las de alto contenido tecnológico. Un dato que refleja este desplazamiento de la producción es que la construcción naval pasó de producir en Europa Occidental 13 millones de toneladas brutas en 1975 a sólo 4 en 2001. En cambio, los astilleros asiáticos aumentaron su producción de 17 a 26 millones de toneladas (Alonso, 2013).

Comenzaron a implementarse una serie de políticas orientadas a la represión de la demanda a través de una embestida contra los salarios y una socialización de los costes originados por la crisis

Durante los años noventa, la producción y distribución capitalista alcanzó la escala global. Para ello fue necesario romper las barreras estatales de control y regulación que prevalecían hasta entonces. Como resultado, se produjo una importante liberalización de la economía. De todos modos, no se abandonó la necesidad del Estado y las transferencias públicas como garantes de estabilidad y estímulo para el capital.

CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA EN EL ESTADO ESPAÑOL

En la década de los setenta, en el Estado español coincidieron, por un lado, la crisis de acumulación y por el otro, la debilidad política del franquismo y posterior muerte del dictador. Estos dos procesos son fundamentales para comprender el desarrollo de la crisis y su impacto, así como las decisiones tomadas para seguir garantizando la ganancia frente a la deteriorada estructura productiva e ímpetu del movimiento obrero.

A pesar del importante crecimiento de la economía española desde finales de la década de los cincuenta, esta ocultaba una serie de problemas que estallaron con la crisis. El sector industrial estaba especializado en la producción de bienes intensivos, lo que generó una enorme dependencia energética y de materias primas de las cuales se carecía, así como una importación masiva de bienes de capital y maquinaria. Además, el aparato productivo estaba dividido entre un grupo de grandes empresas situadas en los sectores estratégicos y un amplio grupo de pequeñas y medianas empresas de escaso contenido tecnológico que obligaban a un mercado altamente protegido y poco expuesto a la competencia internacional.

A principios de los años setenta, el deterioro de las condiciones de producción se reflejó en el aumento del desempleo y de la inflación debido a las primeras subidas en los precios de las materias primas. A su vez, aumentó la población ocupada en el sector servicios, que actuó como un primer amortiguador para la mano de obra excedente de la industria. Para contrarrestar estos problemas, se recurrió al endeudamiento interno y externo y a una mayor inflación, lo que conllevó nuevas demandas salariales de los trabajadores.

En torno a 1975, a pesar de lo evidente de la crisis, que hizo descender la inversión productiva y aumentar la capacidad productiva inutilizada, los

salarios reales no dejaron de crecer gracias a la fuerza del proletariado y a la pérdida de legitimidad del Estado franquista. Este recurrió a la transferencia de recursos públicos a la burguesía mediante nacionalizaciones de empresas en crisis a través del Instituto Nacional de Industria, subvenciones a fondo perdido u otro tipo de medidas *ad hoc* para calmar la situación. Esto incrementó significativamente la deuda y disparó definitivamente los precios.

El principal ajuste frente a la crisis se concretó en los Pactos de la Moncloa de 1977. Los Pactos permitieron a la burguesía imponer una política de rentas y monetaria duras que ralentizaron la inflación, ya que los salarios se desaceleraron más rápido que los precios. Todo ello fue envuelto en un discurso compartido que apelaba a la «solidaridad ante la crisis», sentando así las bases para futuras políticas en las que los trabajadores asumirían los costes de la crisis a cambio de democracia parlamentaria.

Pero sin recuperarse de este primer estancamiento, a finales de los setenta la economía española tuvo que enfrentarse a una nueva recesión. Las empresas industriales mostraban grandes problemas financieros, existía un sobredimensionamiento de la capacidad productiva y el mercado era cada vez más competitivo. El Plan Económico a Medio Plazo de 1979 señaló por primera vez la necesidad de una reconversión industrial y entre 1980 y 1982 se declararon once sectores en reconversión como la siderurgia integral, los aceros especiales, la construcción naval y el textil. A su vez, en junio de 1981 se publicó la primera Ley de Reconversión. No obstante, las acciones fueron encaminadas a solucionar las urgencias financieras y al aumento de la productividad por trabajador reduciendo plantillas. La creación de sociedades en reconversión, como Aceriales en el sector de los aceros especiales, fue una de las novedades en este proceso.

Las transferencias de dinero público a las empresas y las prestaciones logradas por la presión obrera para mitigar los golpes de la crisis supusieron un elevado gasto para el Estado. Este trató de trasladar los costes a los trabajadores junto con la patronal y los sindicatos por medio de pactos sociales que redujeron el salario real y modificaron las relaciones laborales (Estado de los Trabajadores de 1980) para disminuir gastos y limitar el poder de negociación de los trabajadores. Asimismo, se asistió a una mayor liberalización de la economía y penetración de capital extranjero.

Todo ello fue envuelto en un discurso compartido que apelaba a la «solidaridad ante la crisis», sentando así las bases para futuras políticas en las que los trabajadores asumirían los costes de la crisis a cambio de democracia parlamentaria

A medio y largo plazo, se establecieron las bases para la acumulación de capital y altos niveles de beneficios empresariales, a través de una mayor liberalización de la economía y una mayor desregulación del uso de la mano de obra

LA LEY SOBRE RECONVERSIÓN Y REINDUSTRIALIZACIÓN Y LA CREACIÓN DE LA SPRI

El nuevo Gobierno del PSOE, tras su holgada victoria electoral en 1982, implementó un programa de ajuste y varias reformas para restaurar la tasa de ganancia. A corto plazo, continuó reduciendo salarios reales y aplicando políticas monetarias y fiscales restrictivas para controlar el déficit. Como resultado, entre 1982 y 1985 la participación de los salarios en el PIB se redujo del 53,2% al 49,7% (González Calvet, 1991). A medio y largo plazo, se establecieron las bases para la acumulación de capital y altos niveles de beneficios empresariales, a través de una mayor liberalización de la economía y una mayor desregulación del uso de la mano de obra.

A su vez, el medio para lograr la competitividad del sector industrial fue una nueva reconversión industrial que trató de reordenar los sectores en crisis, redimensionar la capacidad productiva, sanear las empresas y reducir aún más las plantillas. Fundamentalmente, el objetivo fue un incremento del grado de explotación de la fuerza de trabajo para atraer inversiones, en su mayoría extranjeras. Las políticas del Gobierno se plasmaron en la Ley sobre Reconversión y Reindustrialización de 1984, basada en las directrices establecidas en el *Libro Blanco de la Reindustrialización* de 1983.



El núcleo duro de la reconversión lo formaron la siderurgia integral, los aceros especiales y la construcción naval, pero también tuvo un notable impacto en los electrodomésticos de línea blanca o el textil entre otros. La siderurgia y la construcción naval contaban con una importancia estratégica, reflejada en la defensa nacional, el comercio interno y externo y su estrecha relación con sectores capitalistas con gran capacidad de presión, lo cual les hizo gozar de prioridad. Sin embargo, debido a las fuertes fluctuaciones cíclicas y a la baja rentabilidad de las inversiones –ya fuera por el gran volumen de recursos requeridos o el componente especulativo que implicaban (construcción naval)– estos sectores dependían de grandes transferencias públicas (Vega, 1998). De todos modos, el ajuste no se limitó exclusivamente a los sectores declarados en reconversión. Otros sectores como la minería sufrieron su particular ajuste mediante cierres y reducciones de plantillas.



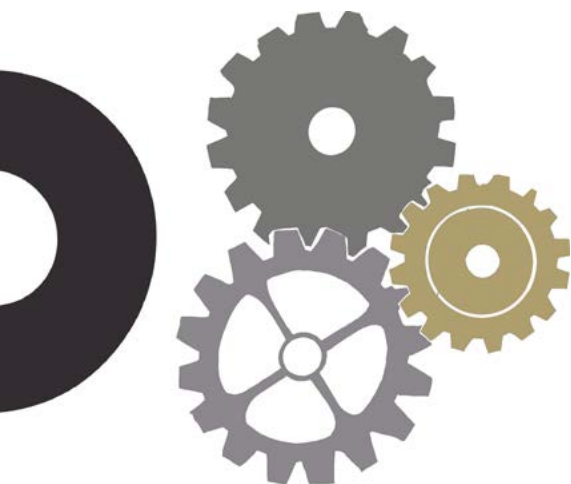
En torno a 1984 se desataron numerosos conflictos tanto en los sectores declarados en reconversión como en otros que no lo estaban. En la siderurgia, tras intensas protestas, se produjo el cese de la actividad de la empresa Altos Hornos del Mediterráneo, y en Aceriales hubo una gran reducción de plantilla por medio de los Fondos de Promoción de Empleo, sin grandes esperanzas de recolocación. En la construcción naval, se generaron conflictos en Gijón, Ferrol, Vigo y Cádiz. Pero el principal enfrentamiento tuvo lugar en los Astilleros Euskalduna, que experimentó una primera fase de ajuste tras duras jornadas de protesta en otoño de 1984, que dieron lugar a una importante reducción de plantilla. Finalmente, el cierre se concretó en 1988. Además, el sector textil también registró disputas en varias ciudades catalanas como Sabadell o Terrassa. En la minería, las principales protestas ocurrieron en las Cuencas Mineras de Asturias, y en Nafarroa se registraron protestas en las minas de Potasas. Asimismo, en la automoción y en el transporte público también se desencadenaron conflictos. Todo ello agitó un clima político ya de por sí cargado de intensidad.

Las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) y los Fondos de Promoción de Empleo (FPE) fueron las medidas centrales de reindustrialización del Gobierno en las principales zonas afectadas. Se constituyeron seis ZUR: Madrid, Barcelona, Asturias, Vigo-Ferrol, la Bahía de Cádiz y la ría del Nervión (Bizkaia y Araba). Las ZUR tuvieron cierta incidencia en aquellos territorios que ya presentaban un mayor dinamismo como Madrid y Barcelona. En el resto, estuvieron lejos de solucionar los problemas preexistentes. Por otro lado, los FPE tampoco lograron su propósito. Estos fondos existieron hasta 1989 y durante ese tiempo fueron incapaces de recolocar a los trabajadores menores de 55 años. En un principio tuvieron una duración de tres años, pero viendo sus escasos resultados se prolongaron dieciocho meses más. Como en 1989 la situación no varió, se ampliaron las posibilidades de las jubilaciones anticipadas y a los trabajadores que no podían jubilarse se les forzó a decidirse por las bajas incentivadas.

Las medidas de reconversión implementadas por el Gobierno español afectaron significativamente a sectores y empresas estratégicas de la CAV. Esto se debió, en parte, a que la economía de la CAV dependía en gran medida del hierro y sus derivados, los cuales fueron los sectores más perjudicados por el impacto de la crisis. Por otro lado, el tejido industrial de la CAV estaba compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que funcionaban como industria auxiliar de las grandes empresas, lo que las volvió vulnerables frente a la crisis.

El Gobierno Vasco emprendió su particular política industrial constituyendo en 1981 la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) con el objetivo de impulsar medidas de reconversión y convertirse en el medio para llevar a cabo la política industrial del Gobierno Vasco. Las primeras actuaciones de la SPRI consistieron en otorgar ayudas a empresas en dificultades, sin implementar ninguna estrategia general. Estas ayudas se ofrecieron en forma de subvenciones y préstamos tanto para las empresas en dificultades, como para la promoción empresarial. Gran parte de los préstamos de promoción empresarial fueron destinados a los daños causados por las fuertes inundaciones del río Nervión en agosto de 1983.

En 1985, el Gobierno Vasco trató de ampliar la reconversión para cubrir aquellos sectores económicos que no habían sido abarcados por la reconversión estatal. Así, presentó el Plan de Relanzamiento Excepcional centrado en la máquina-herramienta, muebles del hogar, artes gráficas, etc. No obstante, este plan reveló el grave deterioro económico y financiero de la pequeña y mediana empresa altamente endeudada. Además, la SPRI lanzó el Programa «Industrialdeak» para dar respuesta a la necesidad de suelo industrial y a la degradación de los polígonos industriales tradicionales. A su vez, mediante la creación de Parques Tecnológicos, encaró la necesidad de disponer de espacios para un nuevo tipo de empresas de marcado carácter tecnológico.



LA ADHESIÓN A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NUEVAS RECONVERSIONES Y PRIVATIZACIONES

A mediados de la década de los ochenta, la actividad económica apreció un ligero repunte. Varios fueron los factores que contribuyeron en ello: la dura política salarial y el Acuerdo Social y Económico (AES) de 1984, las reducciones de plantilla y el saneamiento de las empresas, la socialización de los costes de la crisis, la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 que flexibilizó todavía más la fuerza de trabajo y la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986 que trajo importantes transferencias públicas. Parte de esta mejora se apreció en el crecimiento anual medio del PIB de alrededor del 5% entre 1986 y 1989 (Gálvez, 2013).

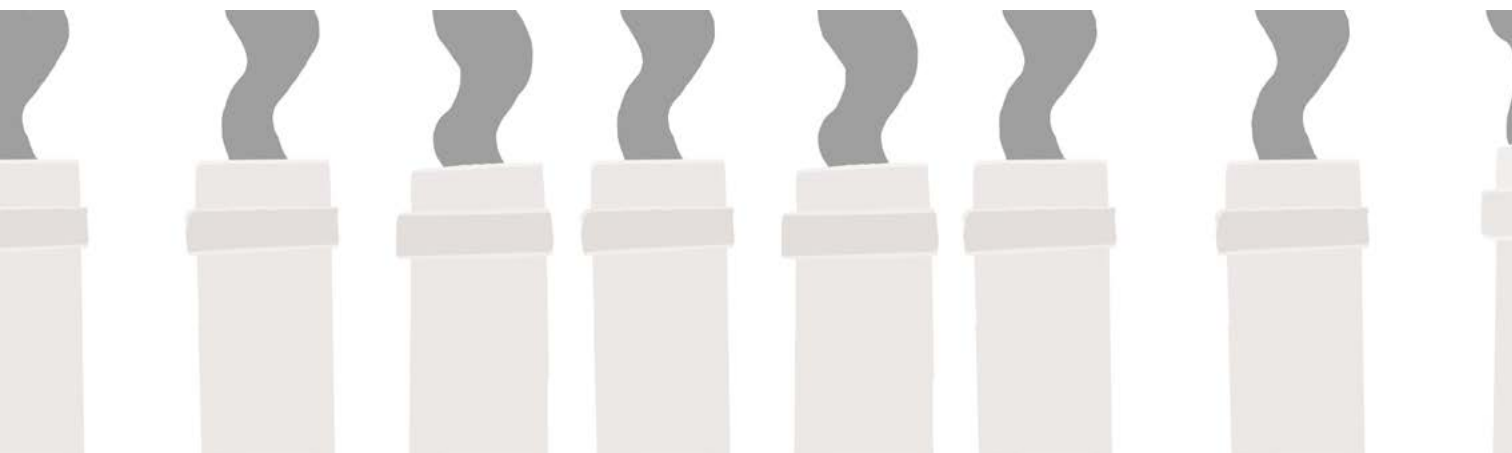
La estabilidad política, debilidad obrera y transferencia de rentas del trabajo al capital generaron tranquilidad entre la burguesía. Durante este periodo, las inversiones productivas registraron una mejoría, lo que permitió una expansión a su vez del sector de la construcción y servicios. Esto se tradujo en unos elevados beneficios empresariales motivados por los bajos salarios, empleos precarios y la rápida recuperación de la inversión. Además, la integración aumentó aún más la liberalización de la economía y esto dio lugar a un incremento tanto de la demanda exterior como de la inversión extranjera en el Estado español.

Pese a todo, esta euforia no se prolongó en exceso, ya que a finales de los ochenta y principios de los noventa la economía en el Estado Español sufrió un nuevo estancamiento. La continua moderación salarial no pudo sostener el escaso crecimiento productivo, por lo que se requirieron nuevos ajustes que necesitaban la aprobación europea. Sin embargo, esto evidenció el escaso interés europeo en modernizar y fomentar la industria española. En su lugar, se explotaron las finanzas y la construcción, con grandes transferencias destinadas a un ambicioso plan de infraestructuras (Rodríguez y López, 2010). En consecuencia, la estructura productiva española mantuvo su especialización en un conjunto de ramas industriales de demanda menos progresiva situándose en un lugar intermedio en la división internacional del trabajo, en donde ciertas producciones estratégicas no encontraron cabida. Por lo tanto, estas tuvieron que ser abastecidas a través del comercio internacional (Gómez Uranga, 1991).

Se produjeron nuevos cierres, ajustes de plantillas y reducciones de la capacidad productiva. A su vez, se llevó a cabo la concentración de la producción mediante la creación de nuevos grupos empresariales como la Corporación de la Siderurgia Integral (Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa) o Acenor y posteriormente Sidenor en los aceros especiales. A pesar de ello, cabe destacar el cierre de AHV en 1996, sin obviar el resto de cierres y despidos que se produjeron en otros sectores industriales. Por otro lado, la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), heredera del INI, privatizó los grupos empresariales saneados por el Estado a cambio de liquidez para seguir pagando la deuda. Esta tendencia se intensificó durante los gobiernos del Partido Popular a partir de 1996, motivada por la desregulación de la economía y aumento de la competencia internacional.

En el contexto de la CAV, la desindustrialización continuó afectando principalmente a la industria pesada y obsoleta, cuya especialización no se logró resolver. Las inversiones productivas en la ZUR del Nervión mostraban un alto coste por cada nuevo puesto de trabajo creado, mientras que la diversificación sectorial, la internacionalización de la producción y el desarrollo tecnológico eran limitados. Los municipios con un mayor grado de actividades industriales tradicionales sufrieron gravemente estas complicaciones, al mostrar menor capacidad para acoger nuevas actividades (Del Castillo, Esteban, Flores, 1989).

Es entonces cuando el Gobierno Vasco priorizó en los noventa una política industrial centrada en el desarrollo tecnológico, la colaboración empresarial y la internacionalización de las empresas a través de los Marcos Generales de Actuación de Política Industrial. Buscó atraer inversión extranjera y aumentar la presencia de la industria de la CAV en el exterior, por medio de la libre competencia y la iniciativa privada mediante los clústeres. Además, los fondos FEDER europeos dieron lugar a importantes planes de infraestructuras. Aun así, debido a la nueva recesión de principio de los noventa, el Gobierno Vasco tuvo que recurrir de nuevo a fondos públicos para implementar el Programa 3R (rescate, reestructuración y reorientación laboral) para las empresas en crisis y garantizar así cierta estabilidad a corto y medio plazo en 1991.



Para alcanzar esta situación fue necesario sustituir mano de obra por capital, aumentar la explotación laboral, transferir una gran cantidad de recursos públicos a las empresas y generar una polarización social en aquellos territorios industriales donde el proletariado se volvió excedente

De este modo, la economía de la CAV vivió una mejora en su situación al llegar a los años 2000. Esta se debió a un mayor desarrollo tecnológico, a la mejora de calidad de los productos y a la reducción de costes. Además, la diversificación de la producción contribuyó a reducir la dependencia en la industria pesada y aumentó la importancia de los sectores metálicos más dinámicos, de la construcción y de los servicios a empresas (IKEI, 2001). Sin embargo, para alcanzar esta situación fue necesario sustituir mano de obra por capital, aumentar la explotación laboral, transferir una gran cantidad de recursos públicos a las empresas y generar una polarización social en aquellos territorios industriales donde el proletariado se volvió excedente.

LA LARGA SOMBRA DE LA PROLETARIZACIÓN

La crisis de acumulación de los setenta implicó una reorganización de la producción a nivel mundial con la intención de asegurar el orden social capitalista. Como resultado, el Estado español realizó su particular reestructuración por medio de la reconversión industrial, para así adaptarse a las exigencias del nuevo ciclo de acumulación definido por la desindustrialización y una mayor dominación de clase.

Esta reestructuración del aparato productivo absorbió una elevada cantidad de recursos públicos que actuaron como salvavidas del capital. Se estima que hasta 1989 la reconversión industrial alcanzó las 2,9 billones de pesetas. Eso sin contar el coste de la reconversión de la banca, fuertemente endeudada al tener participación accionarial en las empresas en crisis y que no hubiera podido recuperar parte de la inversión sin la actuación estatal (Navarro, 1989). ¿Quién financió todo ello? El proletariado a través de un Estado que socializó costes actuando al servicio directo del capital a través del expolio de salarios y ahorros. Así, la baja eficiencia productiva española fue suplida distribuyendo las rentas del trabajo al capital y empobreciendo absoluta y relativamente al proletariado.

La tendencia hacia la destrucción de puestos de trabajo en la industria y la pérdida de peso relativo frente al emergente sector servicio fue una constante. La población ocupada en la industria en el Estado español pasó en 1975 de 3,5 millones de personas a 2,9 millones en 1990 y en la CAV de 355.000 a 240.000 (Torres, 1991). Es por ello que los proyectos de reindustrialización englobados en la reconversión no tuvieron recorrido. En primer lugar, por la tendencia reinante en Europa hacia la desindustrialización, y en segundo, por el interés del Gobierno y la CEE en fomentar la explotación de las finanzas y la construcción a través de grandes proyectos de infraestructuras. En la primera fase de la reconversión del PSOE (1982-1985) las ZUR solo contaron con el 2% del total de recursos destinados a la misma. Además, hasta 1986 tan solo el 16% de los trabajadores acogidos a los FPE logró salir de ellos (Marín, 2006).

El conflicto, por tanto, se desplazó a la mejora de las condiciones de los trabajadores despedidos. No obstante, los sindicatos no dedicaron la misma energía a todos los sectores y la respuesta solidaria fue desigual. Mientras en la siderurgia y en la construcción naval el apoyo fue notable, el calzado y el textil, mayoritariamente compuestos por mujeres, contaron con menor apoyo. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, quienes fueron despedidos sin apenas reivindicaciones. A su vez, los sindicatos desempeñaron un papel decisivo para que el Gobierno llevara a cabo los cierres sin un conflicto mayor al renunciar a unificar movilizaciones de los distintos sectores en lucha y al enfrentarse con los núcleos de trabajadores más combativos (Wilhelmi, 2021).

En ciertos conflictos donde los trabajadores lograron desbordar los cauces legales impuestos para la negociación consiguieron arrancar mayores prestaciones que las ofrecidas por el Estado inicialmente. Sin embargo, a pesar del valor de las luchas, las victorias parciales no lograron compensar la derrota general sufrida por el movimiento obrero. Además, con el tiempo, estas victorias parciales se volvieron reversibles.

El desencanto de la Transición tuvo continuidad en los ochenta y noventa en la clase obrera, aunque su forma varió ligeramente. A la desafección hacia la política institucional se le sumó un carácter autodestructivo, especialmente presente en la juventud, pero sin limitarse a ella. En los barrios proletarios la heroína, el alcohol y los problemas de salud mental se cobraron numerosas vidas. La desolación era considerable en las calles de los antiguos enclaves industriales, con numerosas fábricas abandonadas y en ruinas como grandes telones de fondo.



Gran parte del proletariado no fue reabsorbido en el mercado laboral. Unos atrapados en los FPE, otros jubilados forzosamente y una gran mayoría condenada al desempleo

Gran parte del proletariado no fue reabsorbido en el mercado laboral. Unos atrapados en los FPE, otros jubilados forzosamente y una gran mayoría condenada al desempleo. Por ende, surgió un enorme ejército industrial de reserva que presionó a la baja las condiciones de trabajo y esto tuvo un poderoso efecto disciplinador. La explotación de la fuerza de trabajo sumado a una distribución regresiva, la centralización del capital, la financiarización de la economía, el boom inmobiliario, el crecimiento del sector servicios y la transferencias obtenidas de los fondos europeos contribuyeron al espectacular aumento de los beneficios capitalistas. A pesar de ello, la ralentización de la acumulación se mantuvo como tendencia estructural estrechando aún más los márgenes para la ganancia, lo que desembocó en una nueva crisis económica y financiera mundial en 2008. La drástica disminución de la inversión y de la actividad industrial condujo a una nueva ola de cierres y despidos, lo que desató una nueva ofensiva contra el proletariado, cuyo final no se vislumbra. ●

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, Ángel (2013). "Astilleros varados. Construcción naval de Gijón, el ocaso de un gigante" en Rubén Vega (ed.) *Astilleros en el Arco Atlántico. Trabajo, historia y patrimonio*. Trea: Gijón, 103-130.

Del Castillo, Jaime; Esteban, Marisol y Flores, Francisco (1989). "Inversión industrial y localización: una aproximación al caso de los municipios de la cuenca del Nervión", *Ekonomiaz*, 15, 204-247.

Gálvez, Sergio (2013). *Modernización socialista y reforma laboral, (1982-1992)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid: Madrid.

Gómez Uranga, Mikel (1991). "La internacionalización de la industria española: un proceso acelerado" en Miren Etxezarreta (Coord.) *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*. Icaria: Barcelona, 465-500.

González Calvet, Josep (1991). "Transformación del sector público e intervención en la economía" en Miren Etxezarreta (Coord.) *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*. Icaria: Barcelona, 177-238.

IKEI (2002). *Economía Vasca: evolución sectorial (1976-2001)*. Caja Laboral Popular: Arrasate.

López, Isidro y Rodríguez, Emmanuel (2010). *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*. Traficantes de Sueños: Madrid.

Marín, José María (2006). "La fase dura de la reconversión industrial", *Historia del Presente*, 8, 2006, 61-101.

Navarro, Mikel (1989). *La política de reconversión: un balance crítico*. Eudema: Madrid, 1989.

Piqueras, Andrés (2015). *Capitalismo mutante: crisis y lucha social en un sistema en degeneración*. Icaria: Barcelona.

Torres, María Concepción (1991). "Diez años de reconversión industrial en Euskadi, 1980-1990", *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 13, 165-186.

Vega, Rubén (1998). *Crisis industrial y conflicto social: Gijón, 1975-1995*. Trea: Gijón.

Wilhelmi, Gonzalo (2021). *Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España, 1975-2004*. Akal: Madrid.

HISTORIA
REPORTAJE

La llama obrera domesticada de la Transición



Imanol Satrustegi



Al final de la dictadura franquista el movimiento obrero de Euskal Herria, al igual que en otros lugares de Occidente a lo largo del llamado *Segundo Asalto Proletario a la Sociedad de Clases*, consiguió gran capacidad de lucha y movilización. Frente al capitalismo franquista se irguió un torbellino de luchas radicales, asamblearias y unitarias. Gracias a ello, la clase obrera pudo mirarse cara a cara con la dictadura e incluso llegó a poner en apuros el poder del capital. Ante tal amenaza, la burguesía reaccionó y, a lo largo de la Transición, consiguió reconducir la situación, gracias, entre otras razones, al nuevo marco de relaciones laborales nacido de las instituciones democráticas y a la inestimable ayuda de los partidos y sindicatos de la izquierda mayoritaria. ¿Cómo consiguió el capital domesticar la llama obrera que amenazaba su poder? Eso mismo es lo que trataremos de desgranar en las siguientes líneas.

LA LUCHA OBRERA BAJO EL FRANQUISMO

La dictadura franquista fue, desde el primer momento, un régimen con un marcado carácter *de clase*. Su objetivo fundacional fue detener el programa reformista de la República e impedir el auge del movimiento obrero, que amenazaba los intereses de las élites económicas. Para ello, se prohibieron y persiguieron todas las organizaciones de izquierda, se impidió la reproducción política de la clase obrera, e incluso, se quiso borrar al proletariado del vocabulario, sustituyéndolo por el ambiguo término de *productores*. Además, siguiendo al ideal corporativista del fascismo, se trató de hacer desaparecer la lucha de clases por decreto, regulando los diversos aspectos de la vida social y laboral del país de manera autoritaria, especialmente a través del Sindicato Vertical. La mano de obra fue disciplinada a través de la represión. Por todo ello, una de las consecuencias de la Guerra Civil fue la desaparición del movimiento obrero, lo que provocó el descenso del salario real y el aumento del beneficio empresarial.

Sin embargo, la España franquista empezó a vivir profundos cambios en la década de 1950, cuando se enganchó al crecimiento de la llamada Edad de Oro del Capitalismo a través del Pacto Hispano-Americano de 1953 y del Plan de Estabilización de 1959. El denominado *Desarrollismo* sacó a España del retraso económico e industrial de la posguerra. Aquel crecimiento económico se basó principalmente en el capitalismo de modelo fordista y modificó por completo la naturaleza y composición de la mano de obra. La mecanización de las labores del campo expulsó la mano de obra hacia las ciudades, donde en pocos años se crearon fábricas y empresas de sectores que hasta entonces no habían formado parte del paisaje industrial –especialmente las diferentes ramas del metal (automoción, electrodomésticos, etc.), pero también otros como la química–. Para aquel entonces, Bizkaia y Gipuzkoa ya contaban con un larga historia industrial y urbana, pero fue entonces cuando se modernizaron las estructuras económicas y sociales de Navarra y Araba.

Fue en aquel contexto de crecimiento económico y transformaciones sociales en el que se fue gestando la formación de una nueva clase obrera. El *Desarrollismo* abrió las puertas a un nuevo marco de relaciones laborales, y con ello se inició un nuevo periodo de conflictividad laboral, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Cuando surgió el conflicto social, aquella nueva clase obrera necesitó de recursos materiales y culturales para defender sus intereses. Poco a poco, fruto de las vivencias padecidas y compartidas –como las experiencias de explotación, los espacios de socialización obrera, las necesidades económicas o las luchas colectivas–, aquella clase obrera fue forjando una nueva identidad (es decir, una nueva subjetividad o un nuevo *nosotros*). Dicha identidad se articuló en términos de clase, lo que provocó que el proletariado fuera tomando conciencia de

sí mismo y se acabaría constituyendo como sujeto histórico.

Los primeros pasos de aquel primer movimiento fueron tímidos y arduos. La represión era muy dura y el recuerdo de la guerra civil pesaba mucho. Pero a mediados de la década de 1960 eclosionó, articulado principalmente en torno a las Comisiones Obreras (CC. OO.). Lejos de ser un sindicato de corte clásico, CC. OO. era, más bien, un movimiento sociopolítico asambleario y unitario, en el que participaban y colaboraban distintas fuerzas políticas y sociales. El Partido Comunista de España (PCE) era el principal dinamizador de CC. OO. y controlaba las comisiones y las coordinadoras de la mayoría de regiones del Estado español. Pero, además, también participaban cientos de militantes de origen cristiano, los distintos partidos de la izquierda revolucionaria (como ORT, PTE, MCE o LCR-ETA VI, que tenían especial incidencia en Hego Euskal Herria^[1]), militantes cristianos, trabajadores independientes sin filiación política e incluso el Frente Obrero de ETA. El resto de fuerzas sindicales –la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y la cristiana Unión Sindical Obrera (USO)–, en cambio, salvo en algunas regiones o zonas concretas, tenían mucho menos arraigo y fue CC. OO. quien lideró el movimiento obrero. Sin embargo, el movimiento obrero antifranquista era mucho más que eso, puesto que en aquel torbellino de movilizaciones se entrecruzaban un sinnúmero de dinámicas asamblearias y unitarias de base, que a menudo sobrepasaban el control de partidos y sindicatos, como los Comités Obreros –de fuerte implantación en Gipuzkoa–, la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas en Lucha de Vitoria-Gasteiz o las diversas iniciativas impulsadas por la autonomía obrera en diferentes territorios. Tal y como nos contaba un militante obrero de la época, «las asambleas lo eran todo»^[2].

Poco a poco, fruto de las vivencias padecidas y compartidas, aquella clase obrera fue forjando una nueva identidad (es decir, una nueva subjetividad o un nuevo *nosotros*). Dicha identidad se articuló en términos de clase, lo que provocó que el proletariado fuera tomando conciencia de sí mismo y se acabaría constituyendo como sujeto histórico





Podríamos decir que en los últimos años de la dictadura, el movimiento obrero era mucho más que mero sindicalismo; tenía un fuerte contenido político y se convirtió en la columna vertebral de la oposición antifranquista



Durante muchos años, cierta bibliografía defendió que la acción movilizadora de la oposición antifranquista estaba impulsada por motivaciones meramente economicistas o consumistas. Es decir, se afirmaba que la clase obrera aspiraba a instaurar una suerte de estado del bienestar, privado por la dictadura, sin plantearse transformaciones sociales más profundas. Sin embargo, la minoría militante que se movilizaba no lo hacía por conseguir la democracia liberal parlamentaria o una simple mejora de las condiciones de vida. La mayoría de fuerzas políticas que actuaban en la clandestinidad eran organizaciones con programas revolucionarios, es decir, tenía programas políticos, que, bajo las diferentes definiciones de *socialismo*, planteaban futuros alternativos al capitalismo. Lejos de ser algo descabellado, la opción de una revolución parecía plausible en cualquier lugar del mundo, ya que el contexto de la Guerra Fría y los ecos del Mayo del 68 parecían ayudar. Por tanto, podemos decir que se convocaban asambleas, se preparaban saltos y se organizaban huelgas con el objetivo de impulsar una transformación social profunda de la sociedad. Ese anhelo funcionaba como aliciente que impulsaba el resto de luchas y las mejoras laborales estaban subordinadas a ese fin superior.

Además, debido al carácter de clase de la dictadura y a la identificación de la patronal con esa, las luchas del movimiento obrero adquirirían un carácter político y de antirégimen. Cualquier reivindicación laboral o económica, por pequeña que fuera, se oponía al modelo vertical de relaciones laborales de la dictadura, y por lo tanto, podía ser objeto de represión. Además, a partir de cierto punto, los golpes represivos, lejos de contener o paralizar las reivindicaciones, radicalizaba, ampliaba y politizaba las luchas. Asimismo, los partidos políticos de la oposición se afanaban por incluir reivindicaciones de carácter político en las plataformas reivindicativas que presentaban a la patronal. Esto se hacía con el objetivo de que la clase obrera tomara conciencia de la necesidad de ligar las reivindicaciones cotidianas con las luchas políticas de mayor alcance, aunque luego normalmente se negociara «con las cosas de comer». Por todo ello, podríamos decir que en los últimos años de la dictadura, el movimiento obrero era mucho más que mero sindicalismo; tenía un fuerte contenido político y se convirtió en la columna vertebral de la oposición antifranquista.

Por último, cabe destacar que algunos rasgos característicos de las movilizaciones del tardofranquismo tenían importantes elementos solidarios y comunitarios, para nada individualistas o economicistas. Por ejemplo, en aquella época eran habituales las huelgas de solidaridad, es decir, las que se hacían para apoyar a otros centros de trabajo en conflicto. Esas suponían la pérdida de una parte del salario con el único objetivo de apoyar a otros miembros de la misma clase. Asimismo, se exigían aumentos *lineales*, aumentos salariales no proporcionales para que los de menor sueldo ganaran más, que tenían cierto carácter igualitarista que superaba toda reivindicación egoísta.

En aquella época, se convirtió habitual interrumpir la jornada de trabajo para realizar asambleas, y según nos relatan antiguos miembros del movimiento obrero, era raro el mes en el que se cobraba el salario entero, debido a los numerosos paros que se celebraban^[3]. Además, cuando se producían detenciones a militantes del movimiento obrero, sus compañeros de trabajo solían convocar paros de inmediato para exigir su puesta en libertad, y el propio empresario se veía obligado a rogarles a las autoridades que lo liberaran, para así poder retomar la producción^[4].

A lo largo de la primera mitad de los 70, el auge de las luchas fue continuo y, a partir de cierto momento, el éxito de las movilizaciones estuvo casi garantizado. En ocasiones, la autoridad de la patronal se llegó a poner en cuestión y, a menudo, no les quedaba más remedio que aceptar la mayoría de las reivindicaciones de la plantilla. En una fábrica de Tafalla, por ejemplo, con mucho esfuerzo se consiguieron subidas salariales de hasta un 34 % anual, se abolieron las horas extras y consiguieron que se hicieran fijos a los trabajadores eventuales de la plantilla: «era un momento que se ganaba todo»^[5]. Asimismo, un trabajador de la Superser de Pamplona nos relataba lo siguiente:

«Llegó un momento, teníamos tanta fuerza, que éramos los amos de la barraca de arriba abajo. (...) Nos perdía el exceso de fuerza. Se consiguen muchas cosas, es decir; ¡joe! (...) cumplía los años alguien y había una fiesta. En la cadena: los cronometradores no se atrevían a bajar. Los corrías a boinazos con lo cual tenías unos topes [parámetros que medían el rendimiento que debían trabajadores, por ejemplo, cuántas piezas debían producir en una hora]... que, con lo cual, igual había unos puestos de trabajo que a las tres horas habías acabado el trabajo. E iban a tomar el sol a la terraza y los veía toda la dirección. O sea, era un poder... era un contrapoder en realidad»^[6].

LA CRISIS DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN SINDICAL

El movimiento obrero creció y desarrolló herramientas efectivas para la lucha. La solidaridad obrera funcionaba y eran capaces de arrancar conquistas a la patronal. Existía una gran capacidad de presión. Además, la represión, lejos de contener o erradicar las protestas, provocaba que esas se radicalizaran y extendieran. Las protestas sociales empezaban a poner en cuestión la autoridad de la patronal y el régimen franquista temió perder el control de la calle. Ante tal situación, las rentas del trabajo crecieron por encima de las del capital, es decir, la tasa de beneficio de los empresarios se redujo. La minoría militante, ante el auge de las luchas, vio la situación con euforia y por momentos creyó que se encontraba ante una situación *pre-revolucionaria*. A mediados de los años 70 el régimen franquista se encontraba contra las cuerdas.

Por si todo eso fuera poco, la crisis económica complicó aún más la situación. El aumento del precio del petróleo golpeó la débil y dependiente economía española, puso fin al crecimiento económico del capitalismo keynesiano-fordista de posguerra y desencadenó el descenso de la actividad económica, la desinversión y el paro. El movimiento obrero, bien organizado y movilizado, quiso hacer frente al alza de los precios con más movilizaciones, lo que provocó fuertes aumentos salariales. Pero, al mismo tiempo, la clase empresarial optó por reflejar esos aumentos, una vez más, en los precios de consumo. La clase obrera y la patronal trataron de que el coste de la crisis recayera sobre el otro, provocando una espiral inflacionista, que llegó a ser de 28,4 % en agosto de 1977.

La oposición antifranquista erosionó la dictadura y la crisis acabó imposibilitando su continuidad. Por un parte, la dictadura ya no era capaz de contener las movilizaciones de la oposición y los golpes represivos en vez de paralizar a la oposición la radicalizaban. Por otra parte, ante el final del periodo de crecimiento desarrollista, la economía española requería de profundas reformas. Sin embargo, la dictadura no era capaz de realizarlas, ya que contaba cada vez con menos margen de maniobra. Además, existía el temor de que el ejemplo de la Revolución de los Claveles de Portugal (1974-1976) pudiera cundir en España. La dictadura había dejado de ser útil para las élites franquistas y la burguesía. Por lo tanto, tuvieron que optar por improvisar la demolición controlada de la dictadura para dotar al capitalismo español de un nuevo marco legal que contara con la aceptación de la oposición y la suficiente legitimidad para acometer las reformas económicas necesarias, todo ello sin tocar las bases principales del sistema económico.



Fue en ese intervalo de tiempo cuando las expresiones asamblearias y unitarias del movimiento obrero alcanzaron su cenit. En Bizkaia, por ejemplo, en septiembre de 1976 se creó la Coordinadora de Fábricas de Vizcaya que reunía a los delegados elegidos por los trabajadores de las asambleas de las fábricas más importantes de toda la provincia. En Errenteria, por su parte, entre 1976-79 estuvo activa la Asamblea Popular, un órgano de participación y contrapoder popular que organizaba y coordinaba movilizaciones y que también servía para discutir diversos aspectos de la vida política y social.

Tras la muerte del dictador, las élites franquistas pretendieron implantar una reforma superficial de la dictadura para prolongar el llamado *franquismo sin Franco*. Pero la oleada de las movilizaciones del invierno-primavera de 1976, con los sucesos de Vitoria-Gasteiz como jalón principal, desbordaron completamente al Gobierno. Arias Navarro tuvo que dimitir, y tras la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno, el Régimen tuvo que dar su brazo a torcer, aceptar la participación de la oposición y caminar hacia la creación de un sistema constitucional y parlamentario equiparable a las democracias liberales de Europa. Todo el proceso se produjo bajo férreo control del Estado, cerrando toda vía a una salida abrupta o rupturista. Solo entonces se pudo empezar a atisbar la posibilidad de que una apertura podría culminar en una posible democratización del Estado.

Ante los cambios que se avecinaban, el movimiento obrero y las organizaciones sindicales se prepararon para adaptarse a la nueva situación. En el seno de CC. OO., la mayoría de militantes y grupos políticos era partidario de aprovechar la hegemonía que CC. OO. tenía sobre el movimiento obrero para convertir dicha organización en una Central Sindical Unitaria que agrupara a toda la clase obrera, independientemente de su filiación política. Sin embargo, ni UGT ni USO –que hasta entonces habían tenido un papel modesto, pero que estaban creciendo mucho– estaban por la labor de formar una central sindical unitaria y preferían un modelo sindical plural similar al de otros países europeos. En ese contexto, en el que parecía que la naciente libertad sindical iba a traer, al mismo tiempo, división entre las distintas centrales, se celebró la Asamblea de Barcelona en julio de 1976: el principal hito de la transición sindical de CC. OO. En dicha asamblea, celebrada todavía en la clandestinidad, la corriente mayoritaria del sindicato, liderada por el PCE, adoptó la decisión de convertirse en un sindicato al uso, aceptando *de facto* la división sindical. Solo algunas de las corrientes revolucionarias de CC. OO. se opusieron, como los partidos maoístas ORT y PTE, que no aceptaron la decisión, se escindieron y creando sendos sindicatos de carácter radical y unitario.

Tuvieron que optar por improvisar la demolición controlada de la dictadura para dotar al capitalismo español de un nuevo marco legal que contara con la aceptación de la oposición y la suficiente legitimidad para acometer las reformas económicas necesarias, todo ello sin tocar las bases principales del sistema económico

Fue en ese intervalo de tiempo cuando las expresiones asamblearias y unitarias del movimiento obrero alcanzaron su cenit





GERMAN RODRIGUEZ
¡DISEMINADO
POSOLUCION CUER
POS REPRESIVOS!
L.K.I.



En dichos pactos, se priorizaba la recuperación de los beneficios empresariales, la liberalización de la economía, y sobre todo, la contención salarial para reducir la inflación. Dichas medidas iban a afectar negativamente en las condiciones de la clase obrera, pero tanto PSOE como PCE, así como sus respectivas organizaciones sindicales (CC. OO. y UGT), aceptaron dichas medidas y se comprometieron a limitar la movilización obrera, a cambio de ciertas contrapartidas sociales y políticas

EL PACTO SOCIAL Y LA RESISTENCIA

Tras el franquismo, debido a la crisis económica, las elites y la burguesía necesitaban nuevas fuentes de legitimidad para el capitalismo español, además de un marco estable para poner las bases de la recuperación económica. Las medidas económicas se iban a centrar en la recuperación del excedente empresarial, y por tanto, sin duda iban a provocar que el coste de la crisis recayera sobre las espaldas de la clase obrera. Pero todas esas medidas no se podrían implementar con el movimiento obrero movilizado. Para ello, el Gobierno y las élites necesitaban de la colaboración de los principales partidos y sindicatos de izquierda y que esos postergaran *sine die* sus expectativas de cambio social, a cambio de la democratización del Estado y un espacio en el nuevo panorama político. En las primeras elecciones de la era postfranquista, el 15 de junio de 1977, la mayoría de los electores apoyó a las candidaturas favorables a un cambio moderado y a la democratización de las instituciones.

Tras los comicios, esa propuesta se concretó en el espíritu del *consenso*, que en la vertiente sociolaboral adquirió la forma de los Pactos de la Moncloa, firmados en otoño de ese mismo año. En dichos pactos se acordaron las primeras medidas económicas contra la crisis. Se priorizaba la recuperación de los beneficios empresariales, la liberalización de la economía, y sobre todo, la contención salarial para reducir la inflación. Dichas medidas iban a afectar negativamente en las condiciones de la clase obrera, pero tanto PSOE como PCE, así como sus respectivas organizaciones sindicales (CC. OO. y UGT), aceptaron dichas medidas y se comprometieron a limitar la movilización obrera, a cambio de ciertas contrapartidas sociales y políticas. En la práctica eso significaba dar por bueno el naciente régimen monárquico y capitalista. Todo ello se justificó afirmando que no había correlación de fuerzas suficiente para provocar cambios sociales más profundos y que había que evitar una nueva guerra civil o una involución hacia la dictadura. Esa *tregua* entre la oposición y el Gobierno, declarada para facilitar la implantación del nuevo régimen, fue criticada por los sectores más radicales y revolucionarios del movimiento obrero. Denunciaron que se trataba de un pacto social, que tenía por objetivo echar el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera.

La patronal, por su parte, en el primer trimestre de 1976 se había visto contra las cuerdas y completamente deslegitimada debido a su excesiva identificación con la dictadura. Sin embargo, en los meses siguientes aprovechó el *impasse* para reorganizarse y reforzar su posición. Hasta entonces, la burguesía no había necesitado de un organismo propio, ya que contaba con el sostén y el apoyo de la dictadura, especialmente a través del Sindicato Vertical. Pero a consecuencia del desmantelamiento de las instituciones franquistas, tuvo que iniciar un arduo proceso de reorganización, que culminó en la fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en junio de 1977. La nueva organización empresarial empezó a ganar influencia sobre el Gobierno, especialmente a partir de la aprobación de la Constitución en diciembre del año siguiente. Con ello, la burguesía recuperó el control de la situación y parte de su legitimidad social.



Al mismo tiempo, se fue forjando el nuevo marco de relaciones laborales que condicionaría la lucha de clases en los años siguientes. Las dinámicas asamblearias y unitarias que habían protagonizado la lucha antifranquista perjudicaban seriamente la capacidad de negociación del Gobierno y la patronal. A través del Pacto de la Moncloa y con el Estatuto de los Trabajadores (1981), se institucionalizó un modelo de relaciones laborales basado en la delegación sindical y no en la participación obrera. Las principales centrales sindicales (CC. OO. y UGT) no solo aceptaron el nuevo marco de relaciones laborales, sino que, además, colaboraron con el Gobierno y la patronal para hacer desaparecer las asambleas. Asimismo, se prohibieron de manera expresa las huelgas de carácter solidario o político. A partir de entonces, las reivindicaciones del movimiento obrero se limitaron a cuestiones estrictamente laborales o salariales y la política se virtualizó, quedándose esta reducida a los partidos políticos con representación parlamentaria. Por todo ello, cambió el carácter de las movilizaciones del movimiento obrero, que perdieron potencialidad transformadora. La división sindical ya era una realidad, y las dinámicas asamblearias y unitarias entraron en decadencia.

Frente a ello, los sectores más avanzados del movimiento mostraron una fuerte resistencia. Los sindicatos impulsados por la izquierda radical y la izquierda abertzale, así como la autonomía obrera, se opusieron duramente al Pacto Social de la Moncloa y trataron de que el coste de la crisis no recayera sobre la clase obrera. Para el año 1979, el Gobierno y la patronal acordaron topes salariales de entre el 11 % y el 14 %. El movimiento obrero trató de superar aquellos topes, exigiendo aumentos salariales que al menos fueran similares al alza de los precios. Sin embargo, la patronal, reorganizada y relegitimada, resistió el embate «empresa a empresa» y la mayoría de las movilizaciones acabaron en derrota para la plantilla. Por todo ello, el año 1979 fue el más conflictivo de todo el periodo, pero el carácter de las huelgas pasó a ser defensivo, al contrario que en el ciclo de 1975-76.

La resistencia a la implantación del nuevo marco de relaciones laborales fue especialmente dura en Euzkai Herria, donde el movimiento obrero estaba más escorado a la izquierda y los sindicatos favorables a la concertación encontraron resistencia. En los lugares donde la izquierda sindical tenía más fuerza, las asambleas convivieron durante bastante tiempo con el sindicalismo de delegación. Pese a toda la resistencia, la capacidad de lucha del movimiento obrero fue menguando, en algunos casos porque los partidos que lo habían impulsado desaparecieron, como ORT y PTE, y en otros, a consecuencia de los procesos de expulsión y depuración ocurridos en los sindicatos mayoritarios (los trotskistas de LC que militaban en UGT fueron expulsados en 1978 y la dirección de CC. OO. de Nafarroa, favorable a EMK, al año siguiente). Una parte de lo que quedó de la izquierda sindical de Euzkai Herria fue agrupándose en las llamadas Candidaturas Unitarias de Izquierda, que posteriormente en 1985 acabaron formando ESK-CUIS. Por otra parte, Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) fue ocupando el espacio del sindicalismo radical y asambleario, y despuntó especialmente a partir de la lucha contra la reconversión industrial promovida por el Gobierno socialista en los 80. En otros territorios del territorio español, también hubo fuerte resistencia, como en Asturias, donde estaba la Corriente Sindical de Izquierda (CSI).

A partir de 1982, con la llegada del PSOE al Gobierno, la ofensiva contra la clase obrera se recrudeció. Se empezaron a aplicar las recetas neoliberales y se procedió a la reconversión industrial que acabó con algunas de las fábricas más combativas del movimiento obrero. La terciarización de la economía y el surgimiento de la sociedad de consumo acabaron por desdibujar la identidad de la clase obrera y el movimiento obrero fue desapareciendo como agente político de transformación social.

CONCLUSIÓN

Durante la última década de la dictadura franquista, frente al régimen se alzó un potente movimiento articulado principalmente en torno a las luchas de la clase obrera. En aquella coyuntura, las organizaciones revolucionarias tuvieron incidencia en numerosos sectores, y ayudaron a radicalizar, extender y ampliar las luchas, a menudo a pesar de la política de contención del PCE. Así, el movimiento obrero se levantó como un gigante, por lo que pudo mirarse cara a cara con la dictadura y puso en apuros la autoridad de la burguesía. Muchos de aquellos militantes creyeron que el final de la dictadura se produciría de manera abrupta y se abriría un periodo de cambios profundos en la sociedad que acabaría con la explotación capitalista.

Sin embargo, frente al auge de la clase obrera, la burguesía supo reaccionar a tiempo y utilizó el proceso de cambio político para buscar nuevas fuentes de legitimidad en la democracia parlamentaria. Pese a la experiencia de la lucha antifranquista, el sentido del ciclo de lucha del movimiento obrero fue cambiando a lo largo de la Transición a consecuencia de la crisis económica, la cultura del consenso y la ofensiva de la burguesía. La conflictividad social todavía se mantuvo alta, pero las luchas obreras de los siguientes años tomaron un carácter defensivo. Con el tiempo, las perspectivas revolucionarias que habían alentado las movilizaciones hasta entonces se fueron desvaneciendo.

Aunque desde la perspectiva actual parezca una ilusión, aquel fue el último intento serio, al menos hasta el momento, de provocar una revolución social. Para algunos sectores de la sociedad todo parecía posible. En realidad, el movimiento obrero estuvo lejos de conquistar sus objetivos, pero existió una intensa pugna entre ese y la élite burguesa, y pese a todo, disputó la hegemonía social al régimen monárquico y parlamentario que se impuso tras la Transición y consiguió dificultar su continuidad.

La ruptura revolucionaria que los militantes revolucionarios esperaban al final de la dictadura finalmente no se produjo, pero la oposición antifranquista sí que obtuvo numerosas victorias parciales. A través del movimiento obrero, por ejemplo, se consiguieron aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales; a través del movimiento vecinal, en cambio, mejoras en las infraestructuras (asfaltado, alcantarillado, alumbrado...) y servicios en los barrios obreros (consultorios, guarderías, casas de cultura...); y los nuevos movimientos sociales, por último, fueron pioneros en numerosas reivindicaciones (feminismo, ecologismo, liberación sexual, antimilitarismo, pacifismo...). Muchos de los derechos que hasta la crisis de 2008 teníamos como imprescindibles e irrenunciables son resultado de las luchas de entonces. Todo ello no habría sido posible sin el trasfondo socialista y revolucionario de aquel movimiento. Los anhelos rupturistas fueron fundamentales tanto para motivar a la minoría militante, como para convencer a otras capas de la clase obrera. Sin el aliciente de la revolución, sin un impulso rupturista cercano, las movilizaciones no habrían sucedido de la misma manera y no se habrían producido las mejoras laborales y sociales que se consiguieron.

Pero, por otra parte, aquellas mismas mejoras (aumento de los salarios, creación del estado del bienestar), si bien a corto plazo pusieron en apuros a la burguesía, al final acabaron por integrar a la clase obrera en el sistema capitalista. El aumento de los salarios se tradujo en consumismo y no en una mayor autoorganización; la democratización del Estado trajo desinterés por la política y no más participación horizontal o asamblearia. Por tanto, podemos decir que el balance de aquel ciclo de movilización fue contradictorio. ●



El sentido del ciclo de lucha del movimiento obrero fue cambiando a lo largo de la Transición a consecuencia de la crisis económica, la cultura del consenso y la ofensiva de la burguesía. La conflictividad social todavía se mantuvo alta, pero las luchas obreras de los siguientes años tomaron un carácter defensivo



Aquellas mismas mejoras (aumento de los salarios, creación del estado del bienestar), si bien a corto plazo pusieron en apuros a la burguesía, al final acabaron por integrar a la clase obrera en el sistema capitalista

NOTAS

[1] Siglas respectivas: Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido del Trabajo de España, Movimiento Comunista de España y Liga Comunista Revolucionaria - Euskadi Ta Askatasuna VIª Asamblea.

[2] Entrevista: J.V.AC. Antsoain, 7/V/2022, FDMHN.

[3] Entrevista a J.M.S.M.A.: Pamplona-Iruñea, 15/XI/2018.

[4] Entrevista a J.G.I y R.O.S.: Pamplona-Iruñea, 10/XII/2020, FDMHN.

[5] Entrevista a J.M.E.Z.: Tafalla, 22/X/2021, FDMHN

[6] Entrevista a J.U.B.: Pamplona-Iruñea, X/2018.

BIBLIOGRAFÍA

Andrade Blanco, J. A. (2012). *El PCE y el PSOE en (la) transición: la evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*. Siglo XXI.

Domènech Sampere, X. (2022). *Lucha de clases, franquismo y democracia: obreros y empresarios (1939-1979)*. Akal.

Etxezarreta, M. (Ed.). (1991). *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*. Icaria.

Las Heras, J., Messina, I., & Renteria-Uriarte, X. (2022). The formation of Ezker Sindikalaren Konbergentzia: radical unitary unionism in the Basque Country and Navarre. *Labor History*, 1-20.

Pérez Ibarrola, N. (2016). *Langileria berri baten eraketa. Iruñerria 1956-1976*. Gobierno de Navarra.

Rodríguez López, E. (2015). *Por qué fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen del '78*. Traficantes de Sueños.

Satrustegi Andres, I. (2022). *Beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea, 1970-1979*. Gobierno de Navarra.

Satrustegi Andres, I. (2022). Unitary unionism in the transition: a general approach from Navarre. *Labor History*.

Wilhelmi Casanova, G. (2021). *Sobrevivir a la derrota: Historia del sindicalismo en España, 1975-2004*. Akal.

Publicación

MAYO 2023

EUSKAL HERRIA

**Coordinación,
redacción
y diseño
GEDAR LANGILE
KAZETA**

**Web
GEDAR.EUS**

Redes sociales
TWITTER E
INSTAGRAM
@ARTEKA_GEDAR
FACEBOOK
@ARTEKAGEDAR

**Contacto
HARREMANAK@
GEDAR.EUS**

**Suscripción
GEDAR.EUS/
HARPIDETZA**

**Edición
ZIRRINTA
KOMUNIKAZIO
ELKARTEA
AZPEITIA**

**Deposito legal
SS-01360-2019**

**ISSN
2792-4548**

Licencia




arteka